**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Séptima Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**19 de diciembre del año 2019.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes y Acuerdos en cartera:

**A.-** Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación a la actualización de la denominación de Fiscalía General del Estado, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,relativo al oficio de la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía expediente que contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, por conducto de los Diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche, haciendo propia la iniciativa trabajada en colaboración con la “Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste A.C.”

**E.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la propuesta de con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 57 bis y el artículo 57 ter, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, planteada por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, planteada por las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática.

**G.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**H.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia**,** relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**I.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila

**J.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez.

**K.-** Propuesta de Acuerdo para la lectura y trámite de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los Municipios de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

**L.-** Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

**M.-** Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación.

**N.-** Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Educación.

**Ñ.-** Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**O.-** Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el Cuarto Párrafo del Artículo 6 de la Ley Estatal de Educación.

**P.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a enajenar a título gratuito a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), un lote de terreno con una superficie de 154-84-30.56 hectáreas, ubicado en el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con objeto de llevar a cabo la construcción de una Base de Operaciones Militares en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

**Q.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea una nueva fracción vigésimo segunda (XXII) recorriendo las subsecuentes del artículo 4, y reforma por adición la fracción segunda (II) y crea la fracción sexta (VI), ambos del artículo 56, todos los anteriores de la Ley Estatal de Salud; y crea una nueva fracción Décimo Primera (XI), recorriendo las subsecuentes del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**R.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea una nueva fracción Vigésima Sexta (XXVI), recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; y reforma la fracción Primera (I) y Quinta (V) por adición y crea la fracción Séptima (VII) del artículo 79, todos los anteriores de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**S.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la fracción Cuadragésima Primera del artículo 3; crea el artículo 21 Bis; y crea la fracción Cuadragésima del artículo 188, todos los anteriores de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; reforma el artículo 1, el tercer párrafo del artículo 3, la fracción primera del artículo 5 y crea el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**T.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma la fracción Quinta (V) del artículo 103, y crea un nuevo párrafo cuarto del artículo 160, recorriendo los subsecuentes de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; crea el tercer párrafo del numeral quinto fracción tercera del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**U.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**V.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro Educativo para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**W.-** Acuerdo de procedenciadela Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de noviembre del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

El vigente primer párrafo del artículo 60 de la Constitución dispone: “*Las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo, Tribunal Superior, Organismos Públicos Autónomos,* ***la Procuraduría General de Justicia del Estado*** *o Ayuntamientos pasarán desde luego, a Comisión. Las de los Diputados, se sujetarán al trámite que disponga la Ley Orgánica del Congreso.*”

Como es sabido, mediante la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 14 de julio de 2017, se creó la Fiscalía General del Estado, por lo que se hace necesario eliminar, del texto constitucional, cualquier referencia a la Procuraduría General de Justicia.

La última reforma al primer párrafo del artículo 60 de la Constitución fue realizada por la anterior legislatura, precisamente para incorporar dentro de este trámite las iniciativas que, en su caso, presentara la Procuraduría. Tal reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de diciembre de 2016.

Ahora bien, el ex gobernador Rubén Moreira presentó, en el mes de junio de 2017, una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con objeto de establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, pero aprovechó la oportunidad para incorporar lo relativo a la creación de la Fiscalía General del Estado.

Así, entre otras disposiciones, propuso derogar la fracción VIII del artículo 59, que otorgaba el derecho de iniciativa a la Procuraduría y reformar la fracción V, del mismo artículo constitucional para conferir este derecho a la Fiscalía General.

Sin embargo, ni la iniciativa del ex gobernador, ni el dictamen que posteriormente aprobó la anterior legislatura, incluyó la reforma del párrafo primero del artículo 60, generando la inconsistencia que se busca subsanar con la presente iniciativa.

Lo anterior se puede comprobar de la lectura de la iniciativa, del examen del dictamen aprobado por la anterior legislatura y del propio texto de la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de julio de 2017.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa propone, primero, eliminar del primer párrafo del artículo 60 la referencia a la Procuraduría, sustituyéndola por la Fiscalía General del Estado.

En segundo lugar, se propone redactar, con un lenguaje no sexista e incluyente, la parte final del primer párrafo del artículo 60. La porción normativa a que me refiero está redactada en los siguientes términos: “*Las de los Diputados, se sujetarán al trámite que disponga la Ley Orgánica del Congreso*.”

En su lugar, se propone la siguiente redacción: “**Las iniciativas de las Diputadas y los Diputados, se sujetarán al trámite que disponga la Ley Orgánica del Congreso.**”

Considero de la mayor importancia que la Constitución Política del Estado, a través de las reformas como la que hoy se propone, refleje en su redacción un lenguaje incluyente y no sexista.

**TERCERO.-** Dentro de las innovaciones que se introdujeron con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Periódico Oficial el pasado 14 de julio de 2017, encontramos la incorporación de las bases de autonomía del órgano encargado de la procuración de justicia en el Estado, garantizando con ello que el desempeño de sus funciones se realice con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

En este tenor, en la reforma constitucional estatal se precisó que la naturaleza del órgano encargado de la procuración de justicia, correspondería a la de un órgano constitucional autónomo, pues la investigación y persecución de los delitos no puede actualizarse plenamente en tanto la autoridad ministerial se encuentre subordinada a otro poder u órgano e incluso sujeto a injerencias políticas.

En concordancia con lo anterior, se estableció en el transitorio décimo cuarto de la ya referida reforma, la obligación de emitir, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que fue publicado en el periódico oficial***,*** el martes 12 de septiembre de 2017.

Partiendo de lo anterior, quienes dictaminamos realizamos el estudio y análisis de la iniciativa que se dictamina, encontrando que la misma es pertinente y oportuna, puesto que plantea la modificación al artículo 60 de la Constitución Local, en su primer párrafo con la finalidad de modificar el término de “Procuraduría General de Justicia del Estado” por el de “Fiscalía General del Estado”.

Así, quienes dictaminamos estimamos que el proceso de armonización legislativa no debe ser considerado como una simple actividad optativa, pues es un deber jurídico derivado de la reforma constitucional local, imprescindible a efecto de evitar lagunas y antinomias normativas.

Por lo anterior y a efecto de dotar de mayor claridad y coherencia al texto constitucional, estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO.-** Se reforma el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 60.** Las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo, Tribunal Superior, Organismos Públicos Autónomos, la Fiscalía General del Estado o Ayuntamientos pasarán desde luego, a Comisión. Las iniciativas de las Diputadas y los Diputados, se sujetarán al trámite que disponga la Ley Orgánica del Congreso.

**…**

**…**

**…**

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de noviembre de 2018.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al oficio de la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía expediente que contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado, el día 29 del mes de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 05 de diciembre de 2019 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia el oficio de la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía expediente que contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, analizamos el objeto y los alcances de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

Así, al abocarnos al análisis de la Minuta en comento, podemos señalar, que la misma encuentra motivación en diversas iniciativas presentadas durante la LXIV Legislatura, y establece lo siguiente:

* Serán sujetos al proceso de revocación: el Presidente de la República, las y los Gobernadores de las entidades federativas y el Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; para estos casos en las constituciones locales se establecerán las normas relativas.
* En lo relativo al Presidente de la República, se establece que la revocación de mandato podrá ser convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de la ciudadanía cuando la solicitud incluya la participación de al menos 3% de la Lista Nominal, y siempre y cuando involucre por lo menos a 17 entidades federativas que representen, mínimo, el 3% de la lista de electores de cada una de ellas.
* Se especifica que el Instituto Nacional Electoral, dentro de los siguientes treinta días a la recepción de la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato, el cual solo se **podrá solicitar una ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Durante el mes previo a esta fecha, los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud.**
* La votación para la revocación del mandato será libre, directa y secreta, y se llevará a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria (en fecha que no coincida con jornadas electorales federales o locales); el proceso de revocación será válido si participa al menos el 40% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, además de que la revocación solo procederá por mayoría absoluta.
* La organización, desarrollo y cómputo de la votación quedará a cargo del INE, que emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que realizará el cómputo final una vez resueltas las impugnaciones y emitirá la declaratoria de revocación.
* Se señala que está prohibido el uso de recursos públicos en la recolección de firmas, en la promoción y en la propaganda, y que el INE, así como los organismos públicos locales, promoverán la participación ciudadana y serán los únicos encargados de la difusión objetiva e imparcial del proceso.
* Se manifiesta que de proceder la revocación de mandato, quien asumirá la Presidencia de la República de manera provisional durante los 30 días siguientes, será quien ocupe la Presidencia del Congreso y será este órgano el que nombre a quien concluirá el periodo constitucional.
* En los Artículos Transitorios se señala que, en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021, y que la petición correspondiente tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de ese año.
* Asimismo, el artículo sexto transitorio fija la obligación de las entidades federativas de armonizar su legislación dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto consignando que “las constituciones de las entidades federativas, (…) deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta, la jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional.
* Con respecto a la Consulta Popular, se establece que la misma podrá iniciarse con un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución General, la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos y presupuestos de ingresos de la federación, las obras de infraestructura en ejecución y la seguridad nacional, dotándole la facultad a la Suprema Corte de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. El INE tendrá a su cargo la verificación del número de ciudadanos que respaldan la consulta y la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Se prevé que el INE será la única instancia a cargo de la difusión de las consultas populares, y que durante el tiempo que comprenda el proceso deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Por último se establece que las consultas populares convocadas conforme a lo dispuesto en este decreto se realizarán el primer domingo de agosto.

Cabe hacer mención que en esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el tema ha sido abordado por distintos legisladores, en este sentido, se presentaron dos iniciativas; la primera de ellas, la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y adicionar la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y la segunda; iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.

Dichas iniciativas, suscritas tanto por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, como por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, tienen por objeto establecer la revocación del mandato para Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, en ese sentido en las exposiciones de motivos de los promoventes, se puede observar que la incorporación de la figura se hace desde la perspectiva del fortalecimiento del régimen democrático que impera en nuestro país, planteándose la incorporación de esta institución jurídica como una herramienta de la democracia participativa.

En relación a las iniciativas descritas anteriormente, las mismas se encuentran en proceso de estudio en esta comisión, toda vez que aunque esta dictaminadora encuentra plena justificación bajo el diseño de nuestra forma de gobierno, como república representativa, democrática, laica y federal, que se dibuja desde los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerábamos que al encontrarse el tema inmerso en un debate a nivel nacional, resultaba oportuno tomar en consideración las directrices que se fijaran desde las reformas a la Constitución General.

Una vez referido lo anterior, para adentrarnos a la minuta objeto del presente dictamen, haremos algunas consideraciones sobre la figura de la revocación del mandato, relativas a su definición, características y antecedentes, por lo cual, a efecto de mejor proveer, nos abocamos a realizar un breve análisis de derecho comparado en Latinoamérica, así como al estudió del desarrollo de dicha figura en las entidades de la República Mexicana.

1. **Definición, Características y Antecedentes de la Revocación del Mandato.**

La revocación del mandato, es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido (García, 2017).

Esta institución es uno de los instrumentos de la democracia directa, como también lo son el plebiscito, el referendo o la iniciativa popular.

Se diferencia de otros procedimientos de destitución, como el juicio político y el impeachment, en el sujeto que decide y en las razones que lo motivan.

Así, por lo que hace al sujeto, en este caso decide el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario, por el mismo método, es decir en las urnas y no mediante una acción materialmente jurisdiccional que exige garantías del debido proceso, aunque el resultado es el mismo: la destitución del cargo, mientras que en cuanto a las razones que lo originan, encontramos que en la revocación del mandato son motivos, mientras que en las otras figuras son cargos.

En cuanto al diseño de esta institución, de acuerdo a Alan García Campos (2017), la revocación de mandato es una figura que suele reconocerse en las Constituciones, aunque ello en algunas ocasiones no sea suficiente para el ejercicio de la figura, requiriéndose la emisión de leyes que permitan la vigencia de la figura legal. En este sentido si se hace un estudio de derecho comparado, se observa que en algunos casos se le da el carácter de auto-ejecutivo, y en otros se precisa en forma expresa la necesidad de la emisión de una norma para su implementación.

Otra característica de esta institución, son los destinatarios, que son los funcionarios electos, en algunos sistemas políticos en los que miembros del poder judicial son electos popularmente, éstos funcionarios están excluidos a este tipo de procedimientos.

Otro elemento propio de esta figura, es que la revocación del mandato suele tener restricciones de tiempo y número, en este sentido, usualmente no se prevé al principio del ejercicio del mandato, con el propósito de dar un periodo razonable al servidor público para que despliegue su función gubernamental y demuestre su competencia, dando con ello elementos suficientes a los electores para evaluar el desempeño en la gestión.

Alan Campos, también señala que en algunas legislaciones se prohíbe su instrumentación en la etapa última del mandato, puesto que consideran que no tiene sentido implementar una consulta de esta naturaleza cuando está muy próxima la terminación del periodo para el cual fue electa la persona, este argumento encuentra justificación en la idea de que aunque existen diferencias entre una nueva elección y una revocación, la primera permitirá valorar la gestión gubernamental y eventualmente elegir a otra persona o partido.

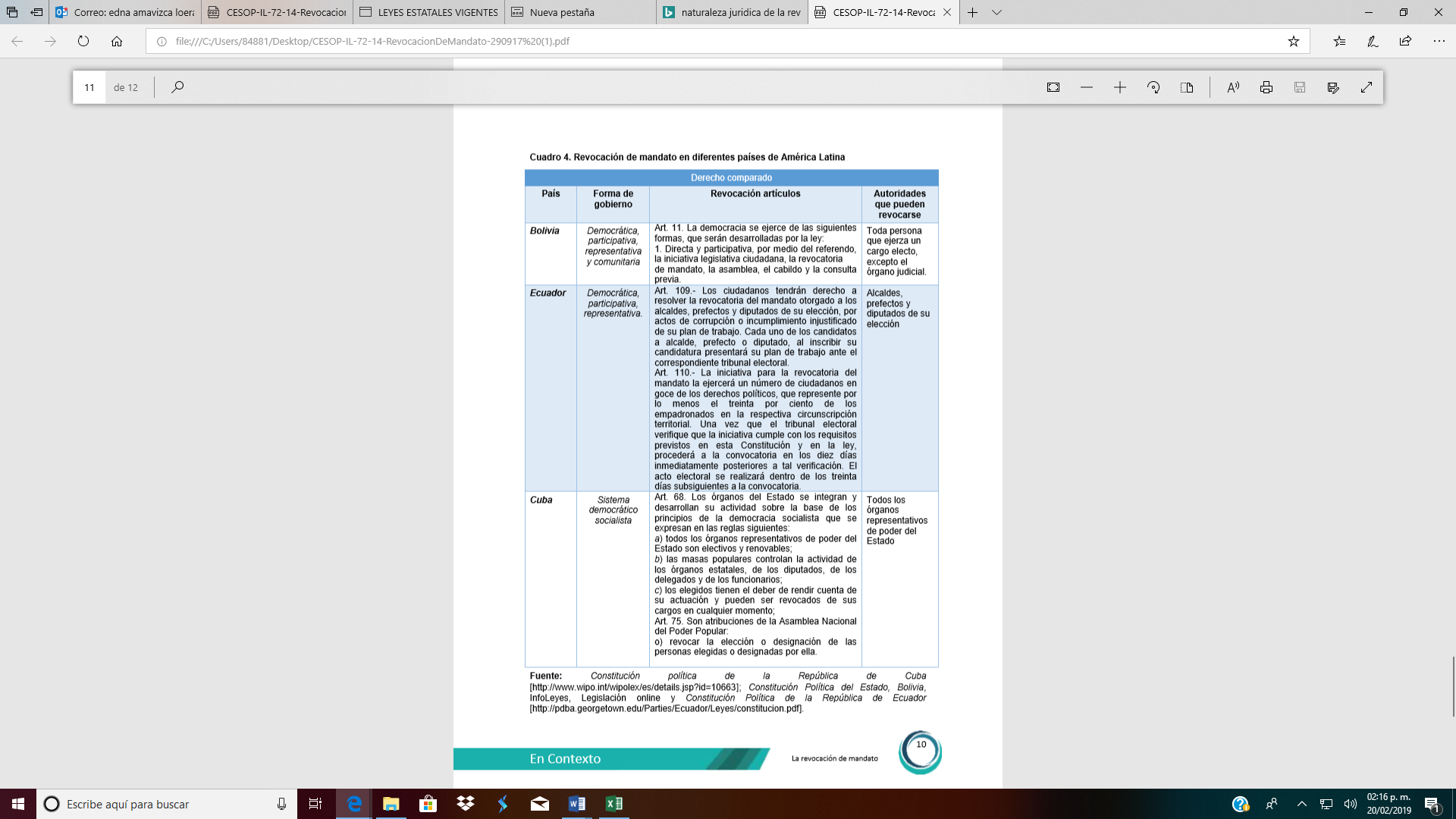
Por último, podemos referir que algunas legislaciones establecen requerimientos agravados en la votación o mayorías calificadas, resulta especialmente interesante que hay quienes se pronuncian por fijar que será necesario por lo menos la misma cantidad de votos con los que se ganó la designación para poder proceder con la revocación.

Entre Los principales argumentos a favor de esta institución, encontramos los siguientes:

1. *Soberanía Popular. La revocación del mandato reconoce a los ciudadanos como la fuente de la soberanía popular, si en ellos reside la soberanía y la ejercen a través de sus representantes- al momento de designarlos mediante elecciones libres, lo lógico es que también puedan destituirlos mediante una votación libre. El sistema representativo es un producto de la soberanía popular y si existe una institución política que, como es el caso de la revocación del mandato, fortalezca su ejercicio, debe ser acogida.*
2. *Mayor cercanía. Al igual que los periodos gubernamentales cortos pretenden mantener un estrecho contacto entre electores y elegidos. La revocación del mandato hace posible que esta cercanía se intensifique y se mantenga latente. La revocación del mandato se convierte en una oportunidad para la sociedad de recuperar esa posibilidad de influencia en el representante, de reivindicar ese poder ciudadano de ratificarlo o removerlo de una manera democrática ante circunstancias extremas.*
3. *Ciudadanía atenta. La revocación del mandato permite que los ciudadanos se mantengan vigilantes y monitoreen la acción pública en los intervalos que transcurren entre un proceso comicial y otro. Promueve que los ciudadanos den seguimiento a sus gobernantes, se mantengan informados y jueguen un papel central en el proceso de gobierno. La posibilidad de revocar el mandato conserva viva la atención ciudadana sobre las actividades cívicas durante los periodos que transcurren de una elección a otra, pues se sabe que en cualquier momento se puede iniciar un procedimiento revocatorio.*
4. *La ciudadanía también puede hacerlo. Si los elegidos pueden ser destituidos por otras autoridades, con mayor razón por los electores que los designan. Reconocer el derecho de los primeros y no de los segundos sería trastocar la premisa bajo la cual es construido el sistema democrático.*
5. *Incentivo a la responsabilidad. Los representantes tenderán a tomar sus responsabilidades más seriamente. La revocación del mandato motiva actitudes más comprometidas con la palabra empeñada e incentiva la satisfacción de las promesas realizadas, las cuales a su vez se harán de manera más seria y responsable.*
6. *Válvula liberadora. La revocación del mandato es una válvula que evita que los conflictos políticos se enconen de manera más aguda y los protagonistas aspiren a buscar salidas extra institucionales. Se trata de un mecanismo regulado, pacífico y constitucional por medio del cual puede expresarse, en cualquier momento, el deseo popular de que un gobernante deje su oficina sin necesidad de recurrir a otras expresiones que polarizan aún más a la ciudadanía.*
7. *Dificultad de otros procedimientos. Ante las dificultades para que los mecanismos de destitución de las autoridades en manos de otros órganos del Estado operen, la revocación del mandato apela directamente a la ciudadanía y disipa cualquier ápice de duda en torno a la legitimidad de la destitución. Los juicios políticos o impeachment, previstos en los sistemas presidenciales, implican múltiples resistencias legales y políticas, tardan demasiado y rara vez se actualizan. La revocación del mandato es una forma que por otra vía- la ciudadanía- genera el mismo efecto: La destitución de la autoridad, pero sin mediar otro órgano del Estado, evitando así la confrontación de los poderes y dotando a la decisión de legitimidad plena.*
8. *Motivos adicionales de destitución. Los procedimientos para la remoción de los funcionarios electos previstos en la actualidad sólo se pueden activar cuando hay una serie de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, mientras que la revocación del mandato, además de aceptar esos motivos para destituir al funcionario público, suma el de la falta de representatividad, mismo que sólo la ciudadanía puede determinar.*
9. *Una vía, institucional. La revocación es una vía constitucional, democrática, institucional, reglada y pacífica para expresar el descontento. Los sistemas democráticos contemporáneos han creado una serie de veredas para expresar la disidencia. La revocación del mandato es aún más extrema, si se quiere, pero siempre dentro de los límites del tablero democrático.*
10. *Fortalecimiento del sistema representativo. La revocación del mandato modifica la arquitectura del sistema representativo tradicional, mas no suprime al sistema representativo; lejos de eso, lo fortalece. La revocación del mandato se basa en la idea de que los elegidos toman decisiones y la ciudadanía va a juzgar dichas decisiones retrospectivamente, ya sea para aprobarlas o rechazarlas con posterioridad a su adopción. Si el sistema representativo pretende reflejar la voluntad mayoritaria, la institución de la revocación del mandato incentiva dicha posibilidad. El simple temor de ser removido o tenerse que defender motivará en los representantes una actitud más apegada a los anhelos ciudadanos.*
11. **Derecho Comparado y Legislación Local.**

En el derecho comparado encontramos, en el caso de América Latina, que Bolivia, Ecuador y Cuba, contemplan en sus legislaciones mecanismos de participación ciudadana directa a efecto de determinar si una persona con cargo público debe seguir en dicho cargo, mediante mecanismos de control ciudadano y jurídicos, es decir en estos países no solo la ciudadanía participa en los procedimientos de revocación del mandato, sino también las asambleas legislativas.

Sirva a manera de referencia, la siguiente tabla:



Fuente: Constitución política de la República de Cuba [http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10663]; Constitución Política del Estado, Bolivia, InfoLeyes, Legislación online y Constitución Política de la República de Ecuador [http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf

Por lo que hace a México, de acuerdo a lo referido por Salvador Moreno Pérez y Kanya Lizárraga, en el documento emitido por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de diputados “La revocación de Mandato” (2017), el primer antecedente de esta figura en nuestro país se encuentra en la Constitución de 1836 de San Luis Potosí, la cual presentó mecanismos como la iniciativa popular el referéndum y la revocación de mandato (Aldasoro, 2016).

Actualmente el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla un único caso en el que puede iniciarse la revocación del mandato, es decir, en el caso de los miembros del ayuntamiento, de esta manera en el artículo 115, se establece lo siguiente:

***“Artículo 115.*** *Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,**democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

***I.*** *Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.*

*Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

***Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.”***

*…*

Como observamos, en este supuesto la Carta Magna dispone que las asambleas legislativas serán las facultadas para revocar el mandato de los ayuntamientos, haciendo referencia de manera expresa al derecho que tienen los sujetos a estos procedimientos de rendir pruebas y hacer alegatos. De lo anterior también se desprende que el constituyente permanente no consideró esta figura para el caso del Presidente de la República, de diputados o senadores.

El tema, ya discutido ampliamente en el Congreso de la Unión, de conformidad a lo referido por Salvador Moreno y Kenya Atenas Nelly, en el documento emitido en septiembre de 2017 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, desde el inicio de la LXIII legislatura hasta esa fecha, se habían presentado10 iniciativas sobre revocación de mandato, de las cuales sólo tres se encontraban con dictamen pendiente y las demás fueron desechadas o retiradas.

Este mismo análisis, provee datos que vale la pena destacar en el sentido de que la revocación de mandato es un asunto de mayor interés en los Congresos Locales, en este sentido, destacan que los Congresos de Jalisco, Morelos, Sonora y Chihuahua, presentaron iniciativas ante el Congreso de la Unión.

Ahora bien, por lo que hace al régimen normativo de las entidades federativas, encontramos antecedentes en los Estados de Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo León y de manera más reciente en Jalisco y en la Ciudad de México.

Otro antecedente al que vale la pena referirnos es el del Estado de Chihuahua, entidad federativa que consagró esta institución en el año 1997, en el artículo 27 de la Constitución Local, y reglamentándola en la Ley Electoral, las disposiciones contenidas en ésta última fueron aplicables hasta que el Pleno de la Corte las declaró inconstitucionales al resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas, es oportuno mencionar que tanto las disposiciones constitucionales como las legales fueron derogadas en junio del año 2012 (Moreno y Lizárraga 2017).

Por lo que hace al Estado de Zacatecas, desde el año 1998 se encuentra plasmada la revocación de mandato como un derecho y una obligación de los ciudadanos en los artículos 14 y 15.

Ahora bien, el Estado de Oaxaca, prevé en los artículos 23 y 24 de la Constitución Local la figura jurídica, como un derecho y una obligación de los ciudadanos, esto desde el año 2011, mientras que su reglamentación se encuentra consignada en el Capítulo Cuarto de la Ley de Participación Ciudadana desde el año 2012 (Moreno y Lizárraga 2017).

El Estado de Morelos, tenía en su marco normativo disposiciones concernientes a la revocación de mandato tanto en su Constitución Local (2013) como en la Ley de Participación Ciudadana del Estado (2013). No obstante ello, el 18 de mayo de 2016 el Congreso del Estado de Morelos aprobó una reforma a la Constitución con la finalidad desaparecer la revocación de mandato (Moreno y Lizárraga 2017).

Guerrero, reconoce en la Constitución local esta figura como instrumento de participación ciudadana en los artículos 19 y 128 fracción IX desde 2014 (Moreno y Lizárraga 2017).

Aguascalientes, por su parte consigna en el artículo 17 de la Constitución del Estado, que la ley regulará la revocación del mandato de las autoridades de elección popular y señalará las causales y procedimientos para su solicitud,

Desde el año 2016 en la Ley de participación ciudadana del Estado de Nuevo León se previó en su capítulo sexto, Libro Tercero, lo siguiente:

***LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA***

***Capítulo sexto***

***Revocación de mandato***

***Sección primera***

***Disposiciones generales***

***Artículo 59.-*** *La revocación de mandato es el mecanismo de consulta a las y los ciudadanos a fin de que éstos se pronuncien mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo para el cual fueron electos el titular del Ejecutivo del Estado, los presidentes municipales y los diputados locales.*

***Artículo 60.-*** *Podrá solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado, al menos el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del Estado, anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel.*

***Artículo 61.-*** *La solicitud de revocación de mandato de un presidente municipal, únicamente podrá ser solicitado por:*

*I. El veinte por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio, cuando los electores sean menores a cuatro mil, anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel;*

*II. El quince por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio, cuando los electores sean de cuatro mil a veinte mil, anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel; o*

*III. El diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio, cuando los electores sean mayor a veinte mil, anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel.*

***Artículo 62.-*** *Podrán solicitar de revocación de mandato de un diputado local de algún distrito electoral del Estado, únicamente el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal con residencia en el distrito electoral por el cual fue electo el diputado, anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel.*

***Artículo 63.-*** *El mecanismo de revocación de mandato procederá solamente una vez en el periodo para el que fue electo el gobernador, presidente municipal o diputado local y podrá solicitarse y realizarse a la mitad de su mandato.*

*La consulta de revocación de mandato para gobernador, siempre y cuando medie solicitud, tendrá fecha verificativa durante la jornada electoral en que se realicen las elecciones intermedias correspondientes en el Estado.*

***Artículo 64.-*** *Las solicitudes de revocación de mandato para gobernador, presidente municipal o diputado local, deben ser presentadas ante la Comisión Estatal Electoral, cumpliendo con lo siguiente:*

*I. Que se presente la solicitud por escrito en la forma y términos que marque esta Ley ante la Comisión Estatal Electoral, precisando el nombre y cargo del servidor público al que se solicita sujetar al procedimiento de revocación de mandato;*

*II. En el caso de que la solicitud se presente por los ciudadanos del Estado, se debe señalar, además, el nombre de dos representantes legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y para controvertir ante el Tribunal Electoral del Estado los actos o decisiones de las autoridades, cuando éstas incumplan con los principios o vulneren los derechos de los ciudadanos consignados en ésta Ley. De no hacerse tal señalamiento, será el representante común quien encabece la lista de solicitantes; y*

*III. Que se especifique de manera detallada la pregunta que se realizará a la población y las posibles respuestas para consultarle la revocación de mandato del gobernador del Estado, presidente municipal o diputado local.*

***Artículo 65.-*** *El presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá que se verifiquen las firmas de conformidad con el reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta.*

*En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de revocación de mandato, prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.*

***Artículo 66.-*** *En los casos en que la solicitud omita alguno de los requisitos establecido en esta Ley, la Comisión Estatal Electoral requerirá al solicitante para que en un plazo, no mayor a cinco días hábiles, cumpla con lo omitido, apercibiéndolo que de no cumplir, se tendrá por no interpuesta la solicitud.*

***Artículo 67.-*** *No podrá ser sujeto del mecanismo de revocación de mandato el Gobernador, presidente municipal o diputado local, dentro de los noventa días previos al inicio del periodo de elecciones locales.*

***Sección segunda***

***Del procedimiento de revocación de mandato del gobernador del Estado***

***Artículo 68.-*** *Una vez verificado el procedimiento contenido en la sección primera del capítulo sexto de la presente Ley, la Comisión Estatal Electoral llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma. Dicho resultado será vinculante para el Gobernador del Estado, cuando por lo menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Estado decidan revocar el mandato.*

***Artículo 69.-*** *La Comisión Estatal Electoral mandará publicar los resultados de la consulta en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y por lo menos en tres periódicos de mayor circulación en el Estado, durante los siguientes diez días hábiles de haber sido validados los resultados.*

***Artículo 70.-*** *En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de mandato tenga como efecto la revocación de mandato del Gobernador del Estado, se estará a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.*

***Sección Tercera***

***Del procedimiento de revocación de mandato del presidente municipal***

***Articulo 71.-*** *Una vez realizado el procedimiento contenido en la sección primera del capítulo sexto de la presente Ley, la Comisión Estatal Electoral llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez del procedimiento de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos del mismo. Dicho resultado será obligatorio para el presidente municipal cuando por lo menos:*

*I. El cincuenta por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea menor a cuatro mil electores;*

*II. El cuarenta y cinco por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea de cuatro mil a veinte mil electores; y*

*III. El cuarenta por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea mayor a veinte mil electores.*

***Artículo 72.-*** *La Comisión Estatal Electoral mandará publicar los resultados del procedimiento de revocación de mandato, la consulta en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y por lo menos en tres periódicos de mayor circulación en el Estado a más tardar en diez días hábiles después de la validación de los resultados.*

***Artículo 73.-*** *En caso de que la declaratoria de validez del procedimiento de revocación de mandato tenga como efecto la revocación de mandato del presidente municipal, se estará a lo dispuesto por lo establecido en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.*

***Sección cuarta***

***Del procedimiento de revocación de mandato del diputado local***

***Artículo 74.****- Una vez realizado el procedimiento contenido en la sección primera del capítulo sexto de la presente Ley, la Comisión Estatal Electoral llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma. Dicho resultado será obligatorio para el diputado local, cuando por lo menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del distrito electoral por el que fue electo decidan revocar el mandato.*

***Artículo 75.-*** *La Comisión Estatal Electoral mandará publicar los resultados de la consulta en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y por lo menos en tres periódicos de mayor circulación en el Estado a más tardar en los siguientes diez días a partir de la validación de los resultados.*

***Artículo 76.-*** *En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de mandato tenga como efecto la revocación de mandato del diputado local, se estará a lo dispuesto por lo establecido por el artículo 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.*

Al respecto, cabe señalar que las referidas disposiciones, no han entrado en vigor, puesto que lo harán hasta que se emitan las modificaciones a la Constitución Local a fin de reconocer la institución, así como también aquellas que se efectúen a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Otro estado que contempla la figura de la revocación de mandato a partir del año 2016 es Jalisco, al respecto el Código Electoral y de Participación Social fija lo siguiente:

***Título Noveno***

***Revocación de Mandato***

***Capítulo Primero***

***Disposiciones Generales***

***Artículo 427.***

*1. La revocación de mandato es el mecanismo de participación social mediante el cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en este Código.*

*2. El Instituto será la única instancia facultada para realizar la consulta de este instrumento de participación social y no se podrá delegar en autoridad alguna.*

***Artículo 428.***

*1. La revocación de mandato podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda.*

*2. Serán causales para solicitar la revocación de mandato de un funcionario de elección popular las siguientes:*

*I. Violar sistemáticamente los derechos humanos;*

*II. Incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados graves;*

*III. Incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada;*

*IV. Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución o la ley;*

*V. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño de su encargo;*

*VI. Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el erario;*

*VII. No ejecutar, manipular o hacer uso ilegítimo de las decisiones de los ciudadanos, manifestadas a través de los resultados de los mecanismos de participación social vinculantes previstos en este Código; o*

*VI. La pérdida de confianza, debidamente argumentada.*

*3. La revocación de mandato sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del período constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de un representante electo popularmente y hasta ciento veinte días naturales después del inicio de la segunda mitad del periodo constitucional.*

*4. Para solicitar la revocación de mandato de los diputados electos por el principio de representación proporcional se requiere de cuando menos el cinco por ciento del resultado de dividir el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el Estado entre el número de diputados electos por este principio, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos electorales.*

***Artículo 429.***

*1. La solicitud de revocación de mandato deberá contener:*

*I. El listado con los nombres, firmas y claves de elector y folios de la credencial para votar de quienes lo solicitan;*

*II. El nombre del representante común;*

*III. Un domicilio para recibir notificaciones, en el área metropolitana de Guadalajara;*

*IV. El nombre y cargo del funcionario que se propone someter al proceso de revocación de mandato; y*

*V. La causa o causas por las que se solicita, las razones y argumentos de su procedencia, así como las pruebas que se ofrezcan, en su caso.*

***Artículo 430.***

*1. Una vez presentada la solicitud ante el Instituto, éste debe verificar los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el apoyo ciudadano, dentro de los quince días naturales siguientes a su recepción.*

*2. Una vez verificado lo anterior, el Instituto debe remitir el expediente al Tribunal Electoral, para que éste, previo derecho de audiencia y defensa del funcionario sujeto al procedimiento, resuelva sobre la procedencia de la solicitud de revocación de mandato, a partir del estudio de las causales señaladas, dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción del expediente. La audiencia en la que se desahogue lo señalado en este párrafo deberá ser pública y se transmitirá por los medios que acuerde el Tribunal Electoral, atendiendo al principio de máxima publicidad.*

*3. En caso de ser procedente la solicitud de revocación de mandato, la votación para determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo a más tardar ciento veinte días naturales posteriores a dicha declaración.*

*4. Para la validez del proceso deberán participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso electoral donde resultó electo el funcionario sujeto a este mecanismo.*

*5. Para que proceda la revocación de mandato se requiere que el voto en el sentido de revocación sea mayor al número de votos por el que fue electo el funcionario.*

*6. Para el caso de los munícipes, se tomará como número de votos por el que fue electo el funcionario, el número de votos que obtuvo la planilla de la que formó parte en la elección en la que resultó electo.*

***Capitulo Segundo***

***De la preparación del Proceso***

***Artículo 431****.*

*1. La preparación del proceso de revocación de mandato comprende los actos siguientes:*

*I. La publicación del acuerdo del Instituto Electoral en el que se declare la procedencia;*

*II. La aprobación de la circunscripción territorial donde se aplicará el proceso de consulta y las secciones electorales que lo componen;*

*III. La integración, ubicación y publicación de las mesas directivas de casilla; y*

*IV. La elaboración y entrega de la documentación y material electoral.*

***Artículo 432****.*

*1. El acuerdo del Tribunal Electoral que declare la procedencia deberá contener la fecha de realización de la consulta y se publicará en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.*

*2. El Instituto Electoral podrá solicitar al Tribunal Electoral una ampliación o modificación de los plazos y términos establecidos para el desarrollo del proceso comicial cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar los actos previstos para su desarrollo, sin que pueda la ampliación exceder de treinta días naturales de la fecha señalada inicialmente.*

*3. El acuerdo del Tribunal Electoral que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos deberá estar fundado y motivado y contener la fecha de realización de la consulta y se publicará en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.*

***Capítulo Tercero***

***Instancias Calificadoras***

***Artículo 433****.*

*1. El Instituto Electoral, según las necesidades del proceso y el ámbito territorial de aplicación, determinará la estructura mínima para que se realice la consulta de revocación de mandato. El Instituto podrá establecer las instancias calificadoras que requiera el caso, las que tendrán las atribuciones que les confiere el presente Código y acuerde el Consejo General.*

*2. Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar un representante propietario y un suplente, ante la instancia calificadora que se establezca.*

*3. En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de representantes de partidos políticos ante la instancia calificadora.*

***Capítulo Cuarto***

***Mesas Directivas de Casilla***

***Artículo 434****.*

*1. El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada proceso de consulta de revocación de mandato, decidirá el número y distribución de las casillas electorales, que deben instalarse en mismo número por sección electoral que en el proceso electoral en que resultó electo el funcionario sometido a revocación.*

*2. El Instituto debe instalar cuando menos la misma cantidad de casillas que en el proceso electoral en que fue electo el funcionario sujeto a revocación de mandato.*

***Artículo 435****.*

*1. La designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla se sujetará a las disposiciones siguientes:*

1. *En primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en caso de no ser localizados, serán llamados sus suplentes; y*

*II. En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se estará a lo que acuerde el Instituto Electoral, sujetándose a este ordenamiento legal.*

*2. En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de representantes de partidos políticos en casillas.*

*3. Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar un representante propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla que se establezca.*

***Capítulo Quinto***

***Inicio del Proceso***

***Artículo 436****.*

*1. El proceso de consulta sobre la revocación de mandato inicia con la publicación del acuerdo del Tribunal Electoral por medio del cual declare la procedencia.*

***Capítulo Sexto***

***Documentación y Material Electoral***

***Artículo 437****.*

*1. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales conforme al modelo que apruebe el Instituto Electoral.*

*2. Las boletas deben contener:*

*I. Entidad, Municipio y Distrito, de conformidad con la naturaleza del sufragio y la aplicación territorial del proceso;*

*II. Sello del Instituto Electoral y firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo;*

*III. Talón desprendible con folio;*

*IV. La pregunta sobre si el ciudadano revoca o no el mandato sujeto a consulta;*

*V. Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y*

*VI. El nombre completo y cargo del sujeto sometido a consulta de revocación de mandato.*

*3. En caso de que se utilice el dispositivo de recepción electrónica, el Instituto aprobará el modelo que corresponda.*

***Capítulo Séptimo***

***Campaña de Difusión***

***Artículo 438****.*

*1. No podrá llevarse a cabo campaña alguna por parte de los solicitantes ni del funcionario sujeto a revocación de mandato o de terceros.*

***Capítulo Octavo***

***Del Cómputo y Resolución***

***Artículo 439****.*

*1. La instancia calificadora hará el cómputo de los votos emitidos y enviará al Consejo General del Instituto Electoral la totalidad de las actas de escrutinio y el resultado final de la votación.*

*2. El Instituto Electoral hará el cómputo de los votos emitidos cuando no se establezcan instancias calificadoras; y el Consejero Presidente del Instituto Electoral remitirá el expediente completo al Tribunal Electoral, para que éste declare oficialmente los resultados del proceso de revocación de mandato y en su caso, declare la revocación de mandato del funcionario, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la jornada comicial.*

*3. El Tribunal Electoral remitirá la resolución al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, o al Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta Municipal respectiva, o en su caso, en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento, según corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes. También ordenará su publicación en dos diarios de circulación estatal. Cuando la autoridad no publique la resolución en el medio de difusión oficial dentro del plazo anterior, la publicación en los diarios de circulación estatal tendrá efectos de publicación oficial.*

*4. La revocación de mandato declarada y publicada en los términos de los párrafos anteriores surte efectos al día siguiente de que:*

*I. Transcurra el plazo para impugnar y no se presente el medio de defensa respectivo; o*

*II. Que cause ejecutoria la resolución del medio de impugnación presentado y ésta confirme la revocación de mandato declarada por el Instituto.*

*5. Se estará a lo dispuesto a las normas relativas a cubrir las suplencias de los funcionarios de elección popular.*

La entidad federativa que más recientemente reguló la figura de la Revocación del Mandato, fue la ciudad de México al incluirla en la nueva Constitución Política, en los términos siguientes:

***CAPÍTULO II***

***DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA***

***Artículo 25***

***Democracia directa***

***A. Disposiciones comunes***

*1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.*

*2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.*

*3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.*

*4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.*

*5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.*

*6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta Constitución y tratados internacionales.*

***G. Revocación del mandato***

*1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.*

*2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate.*

***H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y revocación de mandato***

*1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.*

*2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.*

*3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a favor de la revocación.*

Ahora bien, una vez agotado el estudio y análisis del contenido y alcances de la reforma y de lo hasta aquí señalado, quienes dictaminamos consideramos que la revocación de mandato es una figura que encuentra plena justificación bajo el diseño de nuestra forma de gobierno, como república representativa democrática, laica y federal, que se dibuja desde los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, la carta magna dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder dimana del pueblo y éste tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno asimismo, es voluntad del pueblo mismo constituirse en una república federal compuesta por estados libres y soberanos.

Así, podemos concluir, que esta reforma viene a responder a una exigencia de las y los ciudadanos, a través de la reivindicación del poder del conferido al pueblo, con el pleno respeto a la división de poderes, a la toma de decisiones democráticasy a fortalecer la democracia en nuestro país.

Asimismo, coincidimos en la necesidad de fomentar herramientas de democracia participativa como lo es el caso de la consulta popular.

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para quedar como sigue:

**M I N U T A**

**P R O Y E C T O**

**D E**

**D E C R E T O**

**POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO.**

**Artículo Único.** Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

**Artículo 35. …**

**l.** a **VI. …**

**VII.** Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

**VIII.** Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

**1o. …**

1. **…**
2. **…**
3. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

**2o. …**

**3o.** No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

**4o.** El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

**5o.** Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;

**6o.** y **7o.** **…**

**IX.** Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

**1o.** Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

**2o.** Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

**3o.** Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

**4o.** Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

**5o.** El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.

**6o.** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84.

**7o.** Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

**8o.** El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.

**Artículo 36. …**

**I.** y **II. ...**

**III.** Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley;

**IV.** y **V. …**

**Artículo 41. …**

**…**

**…**

**I.** a **IV. …**

**V. …**

**Apartado A. …**

**Apartado B. …**

**a)** y **b) …**

**c)** Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación.

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

**…**

**…**

**Apartado C.** En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

**1.** a **11. …**

**…**

**…**

**Apartado D. …**

**VI.** Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

**…**

**…**

**…**

**…**

**Artículo 81.** La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución.

**Artículo 84. …**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto.

**Artículo 99. …**

**…**

**…**

**…**

**I.** y **II. …**

**III.** Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato;

**IV.** a **X. …**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**Artículo 116. …**

**…**

**I.** Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.

**…**

**…**

**…**

**…**

**II.** a **IX. …**

**Artículo 122. …**

**A. …**

**I.** y **II. …**

**III.** El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

**…**

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno.

**IV.** a **XI. …**

**B.** a **D. …**

**Transitorios**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35.

**Tercero.** Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

**Cuarto.** En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018- 2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria.

**Quinto.** El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.

**Sexto.** Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional.

Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Remítase el presente Decreto al Congreso de la Unión para efectos de lo consignado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 05 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 95, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La presente Iniciativa se sustenta en el compromiso que tiene el Gobierno del Estado de Coahuila en adecuar la administración pública estatal a la complejidad y magnitud de los retos del desarrollo, transformándola en un instrumento que responda con eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias de la sociedad.*

*Por ello, es necesario agilizar la capacidad de respuesta institucional mediante la incorporación de nuevas formas de organización, trámites y servicios que contemplen la simplificación y el uso generalizado de tecnologías de vanguardia en los procesos administrativos.*

*Conforme a esos compromisos, el Gobierno del Estado en el Plan de Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2023, dentro del Eje 1, Integridad y Buen Gobierno, se estableció como estrategia de trabajo, entre otros: el “incrementar los niveles de productividad y eficiencia en la administración y los servicios que se brindan a los ciudadanos. Organizar y coordinar proyectos integrales de tecnología para formar un gobierno digital...”.*

*Se planteó la necesidad de fortalecer el proceso de simplificación y modernización de la administración pública para elevar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios gubernamentales, utilizando nuevos procedimientos administrativos, sistemas de información y tecnología de vanguardia; reducir los tiempos de respuesta; aplicar criterios de simplificación, facilidad de acceso y oportunidad, así como hacer uso extensivo de las tecnologías de la información, a fin de automatizar procesos que agilicen los servicios y trámites de la ciudadanía y hagan más eficiente la gestión en las oficinas del gobierno estatal.*

*Las atribuciones del Instituto se deben orientar, principalmente, a garantizar la certeza y seguridad jurídica en materia inmobiliaria, fortalecer los principios de publicidad y legalidad de los actos registrales, prestar servicios oportunos, ágiles, transparentes y sencillos que dinamicen las operaciones inmobiliarias.*

*Con ese objetivo, es que se presenta la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley del Registro Público del Estado, creando la figura de los “Registradores”, como personal del Instituto capacitado y habilitado, que estará adscrito a las unidades registrales a cargo de un Director Registrador, para dar continuidad, trámite y autorización de los trámites que se ingresen al Registro Público, de forma más especializada y ágil.*

*Como parte preliminar para el nuevo modelo digital del Registro Público, es necesario modificar la forma en que se autorizan los trámites por parte de las oficinas registrales, para lo cual se tendrá facultad para revisión exhaustiva, verificación y validación de las inscripciones, certificaciones y publicaciones, pudiendo mediante su firma electrónica, autorizar los trámites que ingresan.*

*Lo anterior, traerá como consecuencia que el estudio y resolución de los trámites se lleve a cabo con más rapidez, eliminando la burocracia, optimizando tiempos de entrega y combatiendo la discrecionalidad.*

*Igualmente, se establece en los artículos transitorios que los detalles del procedimiento para determinar el número de Registradores necesarios para cada oficina registral, así como de la forma en la que le serán asignadas las vertientes de los trámites que estarán a su cargo, para lo que se deberán hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, verificando que la misma persigue la finalidad de crear la figura de los “Registradores”, como personal del Instituto capacitado y habilitado, que estará adscrito a las unidades registrales a cargo de un Director Registrador, para dar continuidad, trámite y autorización de los trámites que se ingresen al Registro Público, de forma más especializada y ágil.

El promovente sustenta su proyecto en que *“[c]omo parte preliminar para el nuevo modelo digital del Registro Público, es necesario modificar la forma en que se autorizan los trámites por parte de las oficinas registrales, para lo cual [el director registrador] (…) tendrá facultad para revisión exhaustiva, verificación y validación de las inscripciones, certificaciones y publicaciones, pudiendo mediante su firma electrónica, autorizar los trámites que ingresan.”*

Asimismo, refiere que de aprobarse esta reforma la misma *“traerá como consecuencia que el estudio y resolución de los trámites se lleve a cabo con más rapidez, eliminando la burocracia, optimizando tiempos de entrega y combatiendo la discrecionalidad”.*

Por lo que hace al contenido y alcances de la iniciativa, se observa la reforma a fracción XX del artículo 5, la fracción II del artículo 8, la fracción XXIII del artículo 11, las fracciones I y III del artículo 13, el artículo 14, el primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16 y el artículo 101; la adición dela fracción XXIV al artículo 11 y la fracción IV del artículo 13, de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el sentido que se señala en el cuadro comparativo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 5.-** Para los efectos de la presente ley se entenderá:    **I. Anotación Preventiva:** Al asiento temporal y provisional de un documento en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza como garantía precautoria de un derecho o de una futura inscripción;  **II. Avisos de Presentación:** A los medios por los cuales el Notario hará de conocimiento del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza la posible celebración de un determinado acto jurídico, y en su caso, la formalización de ese acto en su protocolo. Se clasificarán en avisos preventivos y definitivos;  **III. Aviso de Presentación Definitivo:** Aquel por el cual el Notario comunica al Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que el acto jurídico ya se formalizó;  **IV. Aviso de Presentación Preventivo:** Aquel por el cual el Notario comunica al Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que ante él se está tramitando un determinado acto jurídico, con el objeto de publicitar la prelación;  **V. Boletín Registral:** Medio por el cual las oficinas registrales hacen del conocimiento general el estado que guardan los trámites;  **VI. Calificación:** Análisis jurídico previo que hace el calificador o validador de los elementos de forma y de fondo de un documento, tendiente a determinar la procedencia o improcedencia de las inscripciones, anotaciones o cancelaciones; emitiendo para tal efecto un acuerdo de naturaleza positiva, suspensiva o negativa;  **VII. Calificador/Validador:** Licenciados en derecho o abogados, encargados de realizar la calificación del documento a inscribir;  **VIII. Código Civil:** Al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza;  **IX. Catálogo de actos:** Documento jurídico publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se establecen los actos jurídicos y los requisitos para que sea procedente su inscripción ante el Instituto;  **X. Coordinador Jurídico:** A la persona titular de la Coordinación Jurídica de las oficinas registrales;  **XI. Director General:** A la persona titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **XII. Documento:** Al documento que conste física o electrónicamente en el acervo del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **XIII. Ejecutivo:** A la persona titular del Ejecutivo del Estado;  **XIV. Firma:** Expresión de la voluntad que manifiesta la aceptación de un acto o función a través de características propias de la persona, pudiendo ser de manera autógrafa o electrónica; entendiéndose por autógrafa aquella que la persona plasma de su puño y letra, y por electrónica los datos consignados en forma criptográfica que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al documento, asegurando la integridad del mismo;  **XV. Folio:** Documento electrónico que corresponde a un bien mueble o inmueble o a una persona moral, y en el cual se integra toda la información de los asientos registrales que correspondan a los mismos;  **XVI. Folio Matriz:** Al folio que como consecuencia de la modificación total de la superficie del inmueble, da como resultado la creación de nuevos folios;  **XVII. Función Registral:** Al conjunto de procesos de operación y reglas que deberán observarse para efectuar las inscripciones de los actos jurídicos que se presenten para su registro;  **XVIII. Inscripción:** A todo asiento o anotación realizado en el folio correspondiente, en relación con los actos jurídicos a que se refiere el Código Civil, la Ley para la Familia y otras disposiciones legales aplicables;  **XIX. Oficina Registral:** Unidades desconcentradas de la Dirección General del Instituto, que tienen como objetivo realizar la función registral sobre los bienes en los municipios que comprendan la circunscripción de su competencia;  **XX. Registrador:** A la persona titular de cada una de las oficinas registrales ubicadas en el estado de Coahuila de Zaragoza de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la presente ley;  **XXI. Instituto:** Al Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **XXII. Reglamento:** Al Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **XXIII. Secretaría:** A la Secretaría de Gobierno;  **XXIV. Ley para la Familia:** A la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. | **Artículo 5.-** ...  **I. a la XIX.** …  **XX. Director Registrador:** A la persona titular de cada una de las oficinas registrales ubicadas en el estado de Coahuila de Zaragoza de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la presente ley;  **XXI.** a la **XXIV.** … |
| **Artículo 8.-** Para su funcionamiento el Instituto contará con la siguiente estructura organizacional:    **I.** Dirección General, integrada a su vez por la Dirección Jurídica, Dirección de Seguimiento, Dirección de Administración y Control Interno, la Dirección de Archivo, Coordinación de Informática, Coordinación de Calidad; y    **II.** Oficinas Registrales, integradas a su vez por la Dirección de la Oficina Registral, Coordinación Jurídica; además de las áreas de Recepción y Entrega, Inscripción, Certificación, Archivo y Unidad de Informática. | **Artículo 8.-** …    **I.** …    **II.** Oficinas Registrales, integradas a su vez por la Dirección de la Oficina Registral, Coordinación Jurídica, Registradores; además de las áreas de Recepción y Entrega, Inscripción, Certificación, Archivo y Unidad de Informática. |
| **Artículo 11.-** Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección General:    **I.** Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de las oficinas registrales del estado;  **II.** Resolver las consultas formuladas por el personal directivo, administrativo y operativo adscrito al Instituto;  **III.** Comunicar a los registradores, mediante circulares numeradas en forma progresiva, las determinaciones emitidas por el Ejecutivo o por la propia Dirección, respecto de la institución;  **IV.** Proponer al Ejecutivo los nombramientos de los directores de las oficinas registrales;  **V.** Autorizar la asignación de funciones del personal del Instituto;  **VI.** Gestionar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para el funcionamiento del Instituto;  **VII.** Informar a la Secretaría sobre las actividades de las diferentes oficinas registrales y estadística de los servicios proporcionados;  **VIII.** Dictar las medidas necesarias para agilizar la actividad en el Instituto, promoviendo el desarrollo administrativo y tecnológico de los procedimientos registrales;  **IX.** Supervisar permanentemente la actualización del sistema registral, así como fortalecer la vinculación técnica, operativa y jurídica del Instituto o con otras dependencias, entidades e instituciones con el objeto de consolidar la administración territorial, catastral y registral del estado;  **X.** Promover la implementación y operación del sistema de gestión de calidad en el Instituto;  **XI.** Instruir la conformación de la estadística relativa a los movimientos registrales;  **XII.** Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar oportunamente con los recursos necesarios para la prestación del servicio registral y de favorecer la constante mejora y actualización del Instituto;  **XIII.** Representar al Instituto en los procedimientos judiciales o administrativos, en asuntos de su competencia y en aquellos en que sea parte, para lo cual podrá auxiliarse de la Dirección Jurídica;  **XIV.** Proponer a la Secretaría las reformas y adiciones a los ordenamientos legales en materia registral;  **XV.** Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad; pudiendo confirmar, modificar o revocar los actos que acuerden las oficinas registrales, para esto podrá auxiliarse de la Dirección Jurídica;  **XVI.** Conocer, iniciar y resolver el procedimiento administrativo para fincar responsabilidad a los servidores públicos a su cargo, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas;  **XVII.** Proponer a la Secretaría, la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con dependencias o entidades federales, estatales o municipales, así como con organizaciones vinculadas con los servicios registrales, a efecto de difundir o mejorar la función registral;  **XVIII.** Autorizar los manuales de organización, de procedimientos, del sistema informático registral y de servicios electrónicos que se requieran para el funcionamiento eficiente del Instituto;  **XIX.** Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Instituto, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos;  **XX.** Ser depositario de la fe pública registral en el estado, emitiendo las certificaciones que obren en el acervo del Instituto;  **XXI.** Delegar facultades y obligaciones cuando las necesidades del servicio lo requieran, en términos de la presente ley, del Código Civil, del reglamento y las demás disposiciones legales que resulten aplicables; y  **XXII.** Designar a la persona que suplirá sus ausencias temporales cuando éstas no excedan de un término mayor a quince días naturales.  **XXIII.** Las que le sean encomendadas por esta ley y demás disposiciones aplicables. | **Artículo 11.-** …  **I.-** a la **XXII.-** …  **XXIII.-** Nombrar los registradores que se requieran en cada oficina, previo acuerdo con el Secretario de Gobierno; y  **XXIV.** Las que le sean encomendadas por esta ley y demás disposiciones aplicables. |
| **Artículo 13.-** Las oficinas registrales estarán integradas por:    **I.** Registrador;  **II.** Coordinador Jurídico; y  **III.** Demás personal técnico – operativo que sea necesario. | **Artículo 13.-** …  **I.** DirectorRegistrador;  **II.** …  **III.** Registradores; y  **IV.** Demás personal técnico-operativo que sea necesario. |
| **Artículo 14.-** El Registrador será el encargado de garantizar la buena función registral de la Oficina que corresponda, respecto de todos aquellos documentos y servicios que le sean presentados. | **Artículo 14.-** El Director registrador y registradores autorizarán con su firma los asientos en que se materialice la función registral y tendrán a su cargo todas aquellas funciones que determine el Reglamento. |
| **Artículo 15.-** La persona que ocupe el cargo de Registrador será designada por el Ejecutivo, a propuesta del Director General, para tal efecto se requiere:    **I.** Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  **II.** Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado y cédula profesional, ambos legalmente expedidos por la autoridad competente;  **III.** No encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo; y  **IV.** No haber sido condenado por delito patrimonial intencional. | **Artículo 15.-** La persona que ocupe el cargo de Director Registrador será designada por el Ejecutivo, a propuesta del Director General, para tal efecto se requiere:  **I.** a la **IV.** … |
| **Artículo 16.-** La persona que ocupe el cargo de Registrador tendrá las facultades y obligaciones siguientes:    **I.** Ser depositaria de la fe pública registral en la oficina a la cual se encuentre adscrita;  **II.** Expedir copias certificadas del acervo que tiene en resguardo;  **III.** Realizar un estudio integral de los documentos presentados, calificar los requisitos de forma y fondo para la prestación o denegación del servicio; debiendo fundar y motivar su resolución;  **IV.** Realizar las inscripciones respetando los principios registrales contenidos en la presente ley;  **V.** Revisar el proceso final de la inscripción de documentos en los medios físicos y/o electrónicos disponibles, autorizando con su firma los registros que se generen;  **VI.** Expedir en documento físico o electrónico, las certificaciones o constancias que sobre inscripciones, anotaciones y cancelaciones de los registros que en general soliciten los interesados;  **VII.** Supervisar, en el ámbito de su competencia, la debida observancia de la presente ley, el Código Civil, la Ley para la Familia, el reglamento y demás disposiciones legales aplicables, además de las dictadas por la Dirección General, mediante las cuales deberán revisarse los documentos y los requisitos necesarios para llevar a cabo las inscripciones;  **VIII.** Rendir los informes que le requieran las autoridades competentes conforme a la normatividad aplicable;  **IX.** Rectificar los errores materiales contenidos en las inscripciones; o los de concepto que le sean ordenados en términos del artículo 3655 del Código Civil;  **X.** Rendir a la Dirección General los informes que se le requieran de conformidad con lo establecido en el reglamento y el sistema de gestión de calidad;  **XI.** Representar al Instituto en los procedimientos judiciales o administrativos, en asuntos de su competencia y en aquellos en que sea parte;  **XII.** Conocer, iniciar y resolver el procedimiento administrativo para fincar responsabilidad a los servidores públicos a su cargo, de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **XIII.** Administrar la oficina registral a su cargo, cumpliendo las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la gestión de los recursos humanos que le dicte la Dirección General; así como las relativas al manejo de los recursos materiales y financieros que le sean asignados;  **XIV.** Proponer a la Dirección General los cambios en la asignación de funciones del personal a su cargo;  **XV.** Supervisar los lineamientos de operación del sistema informático establecido en la oficina a su cargo;  **XVI.** Excusarse de ejercer la función registral cuando ellos, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad tengan algún interés en el asunto o sobre el documento que verse a calificar, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento; y  **XVII.** Las demás que le asigne esta ley, el reglamento, el Director General y otras disposiciones aplicables. | **Artículo 16.-** La persona que ocupe el cargo de Director Registrador tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  **I.** a la **XVII.** … |
| **Artículo 101.-** El Registrador ante quien se haya presentado el Recurso de Inconformidad, deberá informar por escrito o medio electrónico oficial a la Dirección General dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, remitiendo a ésta en un plazo no mayor a setenta y dos horas el informe sobre su actuación, acompañando en su caso las documentales que estime necesarias.    En caso de que el Registrador omitiere rendir el informe mencionado en el párrafo que antecede dentro del plazo establecido, se le impondrá una sanción equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado. | **Artículo 101.-** El Director Registrador ante quien se haya presentado el Recurso de Inconformidad, deberá informar por escrito o medio electrónico oficial a la Dirección General dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, remitiendo a esta en un plazo no mayor a setenta y dos horas, el informe sobre su actuación, acompañando en su caso las documentales que estime necesarias.    En caso de que el DirectorRegistrador omitiere rendir el informe mencionado en el párrafo que antecede dentro del plazo establecido, se le impondrá la sanción que corresponda, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
|  | **PRIMERO.** La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.  **SEGUNDO.** El Ejecutivo del Estado, en un plazo máximo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias al Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza.  **TERCERO.** Se derogan las disposiciones de las leyes y reglamentos que sean contrarias a las normas establecidas en el presente Decreto. |

Una vez agotado el estudio y análisis de la propuesta de reforma, quienes integramos la presente comisión, coincidimos con quien suscribe, en la necesidad *de implementar políticas públicas y medidas legislativas tendientes a fomentar procesos rápidos, eficaces, y por supuesto apegados al derecho,* por lo que estimamos procedente, impulsar la creación de la figura del Director Registral, quien será designado por el Ejecutivo Estatal y tendrá la facultad de autorizar con su firma los asientos en que se materialice la función.

Para quienes dictaminamos, la modernización del Registro Público es una necesidad preponderante, que surge de la urgencia de dar respuesta a la problemática por la que ha atravesado la institución y que ha dado lugar a diversas acciones gubernamentales.

En este contexto, es que los integrantes de esta dictaminadora estamos a favor de esta propuesta normativa y de cualquier otra que tenga por objeto agilizar los trámites y procedimientos y de dar certeza jurídica a los coahuilenses.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se **reforma** la fracción XX del artículo 5, la fracción II del artículo 8, la fracción XXIII del artículo 11, las fracciones I y III del artículo 13, el artículo 14, el primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16 y el artículo 101; se **adiciona** la fracción XXIV al artículo 11 y la fracción IV del artículo 13, de la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-** ...

**I. a la XIX.** …

**XX. Director Registrador:** A la persona titular de cada una de las oficinas registrales ubicadas en el estado de Coahuila de Zaragoza de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la presente ley;

**XXI.** a la **XXIV.** …

**Artículo 8.-** …

**I.** …

**II.** Oficinas Registrales, integradas a su vez por la Dirección de la Oficina Registral, Coordinación Jurídica, Registradores; además de las áreas de Recepción y Entrega, Inscripción, Certificación, Archivo y Unidad de Informática.

**Artículo 11.-** …

**I.-** a la **XXII.-** …

**XXIII.-** Nombrar los registradores que se requieran en cada oficina, previo acuerdo con el Secretario de Gobierno; y

**XXIV.** Las que le sean encomendadas por esta ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 13.-** …

**I.** DirectorRegistrador;

**II.** …

**III.** Registradores; y

**IV.** Demás personal técnico-operativo que sea necesario.

**Artículo 14.-** El Director registrador y registradores autorizarán con su firma los asientos en que se materialice la función registral y tendrán a su cargo todas aquellas funciones que determine el Reglamento.

**Artículo 15.-** La persona que ocupe el cargo de Director Registrador será designada por el Ejecutivo, a propuesta del Director General, para tal efecto se requiere:

**I.** a la **IV.** …

**Artículo 16.-** La persona que ocupe el cargo de Director Registrador tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

**I.** a la **XVII.** …

**Artículo 101.-** El Director Registrador ante quien se haya presentado el Recurso de Inconformidad, deberá informar por escrito o medio electrónico oficial a la Dirección General dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, remitiendo a esta en un plazo no mayor a setenta y dos horas, el informe sobre su actuación, acompañando en su caso las documentales que estime necesarias.

En caso de que el DirectorRegistrador omitiere rendir el informe mencionado en el párrafo que antecede dentro del plazo establecido, se le impondrá la sanción que corresponda, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

**SEGUNDO.** El Ejecutivo del Estado, en un plazo máximo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias al Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TERCERO.** Se derogan las disposiciones de las leyes y reglamentos que sean contrarias a las normas establecidas en el presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, por conducto de los Diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche, haciendo propia la iniciativa trabajada en colaboración con la “Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste A.C.”, y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 de diciembre del año 2019, se acordó turnar a estas Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en misma fecha se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, por conducto de los Diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche, haciendo propia la iniciativa trabajada en colaboración con la “Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste A.C.”, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, por conducto de los Diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche, haciendo propia la iniciativa trabajada en colaboración con la “Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste A.C.”, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El crecimiento económico del país, ha generado que aumenten de manera exponencial los asentamientos humanos en las grandes ciudades, dando soporte a las actividades económicas y productivas, permitiendo con ello el avance de estas ciudades.*

*Sin embargo, también este aumento puede generar situaciones que de no regularse de manera adecuada, pueden provocar circunstancias de pobreza entre la población, inseguridad, informalidad y condiciones precarias de vivienda al no tener la capacidad el Estado de cubrir los servicios públicos básicos para asegurar el bienestar y condiciones mínimas de vida digna.*

*El veinticinco de septiembre de 2015, se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales como parte del objetivo de desarrollo 11, ciudades y comunidades sostenibles, entre sus metas establece: “****11.1****De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.-* ***11.2****De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.-* ***11.3****De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países...”[[1]](#footnote-1).*

*Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, México ha llevado a cabo diversas acciones y políticas públicas encaminadas a establecer una estrategia territorial nacional, en la que se integre una política de desarrollo urbano, que establezca ejes relativos al control del suelo, la protección al ambiente, el desarrollo económico y social.*

*En razón de lo anterior, en fecha veintiocho de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual establece en su artículo primero como parte de su objeto: “...I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos; IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y; V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.”[[2]](#footnote-2)*

*Esta nueva Ley General, establece la obligación de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, así como los actores públicos, privados y las organizaciones sociales, garantizando que los planes de desarrollo urbano que se establecen tengan carácter obligatorio, y con ello orientar y conducir el desarrollo de las ciudades.*

*Es por ello, que en fecha veintiséis de diciembre de 2017, se publicó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece como parte de su objeto, el regular las acciones y fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre, las autoridades estatales y municipales a que se sujetará la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población en la entidad y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.*

*El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en su eje rector 3 denominado “Desarrollo Económico Sustentable”, contempla como objetivo 3.9 relativo a “Ciudades de Calidad”, el “contar con ciudades y localidades en condiciones integradas, sustentables, incluyentes, inteligentes y resilientes, que ofrezcan vivienda, infraestructura, espacios públicos, equipamiento y servicios adecuados para una vida digna.”*

*Así mismo, para cumplir tal objetivo, el citado Plan establece como estrategia 3.9.4 “impulsar un nuevo marco jurídico y reglamentario en armonía con la legislación federal en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.”.*

*Por otra parte, el artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, contempla lo siguiente:*

*“Los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y Desarrollo Urbano le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden a las entidades federativas.”*

*En ese sentido, resulta necesario armonizar nuestro marco normativo estatal a fin de incluir la posibilidad de suscribir convenios de coordinación para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden al Estado, como se establece en la citada legislación federal.*

*En razón de lo anterior, la presente Iniciativa propone incorporar, tanto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como, en la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, las modificaciones conducentes que permitan a los municipios asumir, a través de convenios de coordinación, funciones o servicios que correspondan a la entidad.*

*Así, en el artículo 13 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, se incluye que los municipios podrán asumir las funciones o servicios que le corresponden al Estado a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.*

*En la misma tesitura, se plantea llevar a cabo la reforma al artículo 8 de la Ley de Protección Civil para el Estado, adicionando un párrafo en el que se faculta a los ayuntamientos para suscribir convenios de coordinación con el Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, para que asuman la función relativa a la expedición de constancias de factibilidad en materia de protección civil para la construcción de edificaciones e instalación de diversos tipos de establecimientos.*

*Por otra parte, se modifica el artículo 13 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado a fin de contemplar la facultad de los ayuntamientos de suscribir convenios de coordinación con el Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente, para que asuman la función relativa a la evaluación del impacto ambiental, cuando este se requiera para conjuntos habitacionales, fraccionamientos y nuevos centros de población.*

*Cabe señalar que en todos los supuestos, los municipios deberán informar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Secretaría competente, los trámites que en su caso realicen derivados del ejercicio de las funciones que asuman, en virtud de los convenios de coordinación que hayan celebrado.*

*Por otra parte, la planeación del desarrollo urbano con las condiciones actuales del crecimiento poblacional, industrialización y protección ambiental, representa un reto sin precedentes, ya que se debe optar por un crecimiento sostenible, que por una parte aproveche los beneficios y oportunidades que ofrece el crecimiento urbano, pero que además, reduzca el impacto y los costos que ello genera.*

*Conforme a lo anterior, no debemos pasar por alto que el principal factor del crecimiento de las ciudades y el que más nos ocupa es el factor humano, por ello, en la planeación debe preponderarse la inversión en los espacios y servicios públicos, asegurando que sus habitantes tengan acceso a una vivienda digna, agua, energía, cultura, empleo, transporte y en general a una mejor calidad de vida.*

*En ese sentido, se propone reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado a fin de contemplar que los fraccionamientos habitacionales urbanos de cualquiera de las densidades previstas en la Ley, estarán ubicados en las zonas, y como mínimo, con las características de lotificación, usos de suelo, cesión de áreas, vialidad e infraestructura urbana, que se establezcan en el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y/o en los reglamentos municipales de la materia, por lo que no les serán aplicables los artículos 192 a 199 de la Ley.*

*Además, se establece que en el supuesto de que el plan director de desarrollo urbano de algún centro de población y/o los reglamentos municipales de la materia, no contemple las características a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá a lo dispuesto en el citado capítulo.*

*Lo anterior tomando en consideración que los municipios son las autoridades que de forma cotidiana tienen un mayor contacto con la sociedad y sus necesidades, incluyéndose lo relativo al desarrollo urbano de los centros poblacionales, por lo que únicamente en los casos en que sus instrumentos no regulen las densidades y características de las viviendas de los fraccionamientos habitacionales, se deberá atender a lo dispuesto por la citada legislación.*

*Así mismo, se contempla que la constancia de factibilidad educativa emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa en los casos de licencias de fraccionamientos, deberá obtenerse, cuando sea necesaria para la construcción de espacios educativos, por la autoridad municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de agilizar y eficientar su tramitación.*

*Con esta reforma, nuestro Estado contará con un marco normativo actualizado para hacer frente a las necesidades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en beneficio de los coahuilenses.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión, realizamos el estudio del objeto y contenido de la iniciativa que se dictamina, verificando que la misma, busca establecer la facultad de los municipios de *suscribir convenios de coordinación para asumir las funciones o servicios que les corresponden al Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, ello en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que dispone que:*

*“Los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y Desarrollo Urbano le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden a las entidades federativas.”*

En este orden de ideas, quienes promovemos la iniciativa, proponemos la adición de la referida facultad de suscribir convenios de coordinación con el mismo propósito en la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, esto en relación con las funciones relativas a la expedición de constancias de factibilidad en materia de protección civil para la construcción de edificaciones e instalación de diversos tipos de establecimientos y a la evaluación del impacto ambiental, cuando éste se requiera para conjuntos habitacionales, fraccionamientos y nuevos centros de población.

Disponiéndose también que en todos los supuestos, los municipios deberán informar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Secretaría competente, los trámites que en su caso realicen derivados del ejercicio de las funciones que asuman, en virtud de los convenios de coordinación que hayan celebrado.

Así, como sabemos las leyes de orden general tienen por característica la distribución de competencias entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, por lo que para quienes dictaminamos el cambio es por demás conducente.

En similar sentido, quienes dictaminamos observamos la necesidad de adecuar la norma conforme a las necesidades actuales del crecimiento poblacional, industrialización y protección ambiental, en atención a lo cual se propone reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, a fin de contemplar que los fraccionamientos habitacionales urbanos de cualquiera de las densidades previstas en la Ley, estarán ubicados en las zonas, y como mínimo, con las características de lotificación, usos de suelo, cesión de áreas, vialidad e infraestructura urbana, que se establezcan en el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y/o en los reglamentos municipales de la materia, por lo que no les serán aplicables los artículos 192 a 199 de la Ley.

Además, se establece que en el supuesto de que el plan director de desarrollo urbano de algún centro de población y/o los reglamentos municipales de la materia, no contemple las características a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá a lo dispuesto en el citado capítulo.

Esto en atención a que los municipios son las autoridades que de forma cotidiana tienen un mayor contacto con la sociedad y sus necesidades, incluyéndose lo relativo al desarrollo urbano de los centros poblacionales, por lo que únicamente en los casos en que sus instrumentos no regulen las densidades y características de las viviendas de los fraccionamientos habitacionales, se deberá atender a lo dispuesto por la citada legislación.

Por último, de la revisión del contenido de la iniciativa se desprende que se promueve que la constancia de factibilidad educativa emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa en los casos de licencias de fraccionamientos, deberáobtenerse, cuando sea necesaria para la construcción de espacios educativos, por la autoridad municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de agilizar y eficientar su tramitación*.*

Una vez agotado el estudio de la iniciativa, quienes dictaminamos coincidimos en que la misma resulta oportuna y necesaria a efecto de contar con un ordenamiento congruente a la Ley General y adecuada a las necesidades de las y los coahuilenses.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se **reforma** la fracción XIII del artículo 4,el artículo 13, el párrafo segundo del artículo 33 y la fracción VI del artículo 158; y se **adiciona** un párrafo quinto al artículo 158, y los párrafos segundo y tercero al artículo 191, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 4.** Para los efectos de esta la Ley se entenderá por:

**I.** a **XII.** …

**XIII.** Constancia de factibilidad educativa: Documento emitido por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, mediante el cual se hace constar que las áreas de cesión destinadas a equipamiento urbano, que sean necesarias para la construcción de espacios educativos, cuentan con las superficies, características y especificaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** a **LXI.** …

**Artículo 13.** Los municipios podrán suscribir convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de que este último asuma el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden al Estado a través de la Secretaría, justificando sus razones para ello. Dichos convenios serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Los municipios deberán informar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes, los trámites que realicen derivados del ejercicio de las funciones asumidas en virtud de los convenios de coordinación a que se refiere el párrafo anterior.

**Artículo 33.** ...

**I.** a **XII.** ...

La unidad administrativa de desarrollo urbano municipal, podrá autorizar la modificación de densidad habitacional a una densidad inmediata mayor o menor, siempre que se acredite que se tiene la capacidad y viabilidad de la infraestructura y los servicios correspondientes.

**Artículo 158.** ...

**I.** a **V.** …

**VI.** Las constancias de factibilidad, que de conformidad con las disposiciones aplicables, sean necesarias para los efectos de este artículo;

**VII.** a **XIII.** …

…

…

…

La constancia de factibilidad educativa emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa en los casos de licencias de fraccionamientos, deberá obtenerse, cuando sea necesaria para la construcción de espacios educativos, por la autoridad municipal, de conformidad con el párrafo tercero de la fracción III del artículo 197 y el párrafo tercero de la fracción III del artículo 198 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 191.** ...

Los fraccionamientos habitacionales urbanos de cualquiera de las densidades que se prevén en el artículo 166 de esta ley, estarán ubicados en las zonas, y como mínimo, con las características de lotificación, usos de suelo, cesión de áreas, vialidad e infraestructura urbana, que se establezcan en el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y/o en los reglamentos municipales de la materia, por lo que no les serán aplicables los artículos 192 a 199 de esta Ley.

Cuando el plan director de desarrollo urbano de algún centro de población y/o los reglamentos municipales de la materia, no contemple las características a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el presente capítulo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se **adicionan** los párrafos tercero y cuarto al artículo 8, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 8.-** …

…

Los ayuntamientos podrán suscribir convenios de coordinación con el Estado a través de la Secretaría de Gobierno, para que asuman la función relativa a la expedición de constancias de factibilidad en materia de protección civil. Dichos convenios serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Los municipios deberán informar a la Secretaría de Gobierno, dentro de los cinco días hábiles siguientes, los trámites que realicen derivados del ejercicio de las funciones asumidas en virtud de los convenios de coordinación a que se refiere el párrafo anterior.

**ARTÍCULO TERCERO.** Se **reforma** el artículo 13, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 13.-** El Ejecutivo del Estado y las autoridades competentes de los municipios podrán celebrar acuerdos de coordinación para la realización de acciones conjuntas en materia de educación, conservación y desarrollo ecológico y protección al ambiente.

Los ayuntamientos podrán suscribir convenios de coordinación con el Estado a través de la Secretaría, para que asuman la función relativa a la evaluación del impacto ambiental, cuando este se requiera para conjuntos habitacionales, fraccionamientos y nuevos centros de población. Dichos convenios serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Los municipios deberán informar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes, los trámites que realicen derivados del ejercicio de las funciones asumidas en virtud de los convenios de coordinación a que se refiere el párrafo anterior.

El Estado y los municipios podrán suscribir convenios de concertación con los sectores social y privado, para los efectos citados en el párrafo primero.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 57 bis y el artículo 57 ter, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, planteada por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 02 del mes de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 57 y el artículo 57 ter, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, planteada por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 57 y el artículo 57 ter, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, planteada por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

*“El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, conforme a la cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.*

*Posteriormente, el 18 de julio de 2016, atendiendo a lo dispuesto en la reforma constitucional antes mencionada, se expidieron simultáneamente la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

*Como objetivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se contemplan los relativos a la definición de las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público; el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas; y la creación de las bases mínimas para establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.*

*Asimismo, en concordancia y complementando lo previsto en la fracción III del Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las mencionadas leyes secundarias se hace referencia a las directrices, principios, valores y reglas de integridad que deben imperar en el servicio público y que los servidores públicos deben observar en forma estricta, para que en su actuación cumplan con las siguientes obligaciones:*

*- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*- Observar en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas, como a las y los particulares con los que traten.*

*- Actuar siempre con integridad y ajustar su conducta para que impere en su desempeño una conducta ética.*

*- Otorgar un trato digno y respetuoso a las personas en general y a sus compañeras y compañeros de trabajo, superiores y subordinados.*

*- Conducir su actuación con base en las directrices, principios, valores y reglas que rigen en el servicio público, dando prioridad a los de ética e integridad, así como fomentar la observancia de los mismos.*

*Como se puede apreciar en lo antes expuesto, la integridad, el comportamiento ético y el respeto a los derechos humanos, son principios y valores de gran relevancia en la actuación y conducta de los servidores públicos.*

*En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se precisan los actos u omisiones que constituyen faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y las sanciones aplicables a las mismas.*

*Al respecto, considerando lo señalado anteriormente sobre la relevancia de la observancia de los valores y principios de integridad, comportamiento ético y el respeto de los derechos humanos, en la actuación y de los servidores públicos, se ha explorado la posibilidad de contemplar otras conductas como faltas administrativas de los servidores públicos, que podrían ser no graves o graves.*

*Lo anterior ha ocurrido ya en algunas entidades de la República y particularmente en lo relacionado con las conductas de hostigamiento y acoso sexual, con un diverso tratamiento que en algunos casos las ubica como faltas administrativas no graves y en otros como graves.*

*En estudios realizados sobre la materia, se señala que las conductas de hostigamiento y acoso sexual suceden tanto en el ámbito laboral público como en el privado, así como que son comunes y que sus causas reflejan una cultura que da poco valor al clima de respeto que debe prevalecer entre quienes son parte de un espacio de trabajo.*

*Con relación a dichas conductas, también se considera que son formas de acoso laboral y que afectan tanto a hombres como a mujeres.*

*Otra consideración es que estas conductas pueden manifestarse en diferentes formas y provenir de los superiores jerárquicos hacia los colaboradores o subordinados, de compañeros de trabajo o, incluso, de trabajadores hacia el titular de un área, así como que constituyen una forma de maltrato que prevalece en las áreas de trabajo, que puede ser de distinta intensidad y gravedad y que se manifiesta en expresiones verbales, en actos discriminatorios y, en casos más graves, en agresiones físicas que incluyen las de carácter sexual.*

*También, se destaca que el hostigamiento y el acoso sexual, son conductas generadoras de un ambiente laboral hostil, que afecta la calidad de vida de las personas que son víctimas en estos casos y el funcionamiento de las instituciones en las que laboran.*

*Por otra parte, en base a la revisión de diversos ordenamientos de la legislación de nuestro país, también se puede apreciar que dichas conductas atentan contra los derechos humanos, lo valores éticos, la igualdad y la integridad física y psicológica de las personas y constituyen formas de violencia y de discriminación en el ámbito laboral.*

*En términos generales, como resultado de todo lo antes señalado, se advierte que existe un reconocimiento generalizado de que el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, constituyen expresiones de violencia sexual, al ser conductas de carácter lascivo e indeseadas que ofenden, intimidan o atentan contra la integridad y la dignidad de las personas.*

*Por la gravedad de estas conductas y con el fin de combatirlas, en nuestro país se han impulsado acciones legislativas y medidas institucionales en los ámbitos federal y estatal, las cuales se han enfocado en forma generalizada hacia la protección de las mujeres.*

*A diferencia de lo antes señalado, en la propuesta que ahora se presenta ante ustedes, el planteamiento relativo a las conductas que se han venido refiriendo, es de mayor amplitud ya que está sustentado en el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al considerarse que en estos casos pueden estar involucrados como actores y víctimas personas servidoras públicas de cualquier sexo.*

*Como se ha señalado anteriormente, para la formulación de esta propuesta de iniciativa se realizó una revisión de diversos ordenamientos de la legislación de nuestro país, por lo que en sus términos hay similitud con lo explorado en otras entidades federativas, para considerar el hostigamiento sexual y el acoso sexual como faltas administrativas graves.*

*Finalmente, se manifiesta que la finalidad general de esta Propuesta de Iniciativa, es establecer una previsión legal que permita que contribuya a prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral del servicio público1.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia efectuamos el análisis del objeto y contenido de la iniciativa, constatando que la misma propone adicionar el artículo 57 bis y el artículo 57 ter, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el propósito de que las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, se consideren como faltas administrativas graves de los servidores públicos.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos en que estas reformas deben ser analizadas bajo el nuevo entramado legal en materia de combate a la corrupción, mismo que como bien se señala en la exposición de motivos, surgió a partir de la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.

Sin lugar a dudas, esa reforma fue un parte aguas sin precedentes en nuestro país, ya que se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción, como un conjunto articulado de instancias administrativas y jurisdiccionales, con la participación de la sociedad civil, que tiene como propósito la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, sino también en aquellos casos en que su función, cargo o comisión se realicen en contra de los principios éticos de la administración pública.

Es así, que con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción en México se inició una agenda de trabajo para la creación del andamiaje legal, institucional que permitiera materializar con eficiencia los esfuerzos anticorrupción, y en ese orden de ideas, en el año 2016, se expidieron tanto la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El tema del hostigamiento y acoso sexual, sin lugar a dudas representa una falta que coincidimos, debe ser considerada dentro de las faltas administrativas graves de los servidores públicos, ya que estas conductas constituyen una ofensa a la dignidad humana y es una expresión del ejercicio abusivo del poder.

No obstante en México, se han venido trabajando mecanismos destinados a erradicar y sancionar estas conductas para hacerle frente al problema, pudiendo mencionar al respecto la creación del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2016, bajo el cual se establecen los procedimientos para prevenir, atender y sancionar estas formas de violencia que afectan principalmente a las mujeres e impiden su desarrollo laboral y el pleno ejercicio de sus derechos, esta dictaminadora considera que se requiere que se reconozca adecuadamente que existen estas conductas, que sin lugar a dudas constituyen una forma de maltrato principalmente hacia mujeres, pero también hacia hombres en las áreas de trabajo, por lo cual coincidimos con la promovente en establecer en la Ley General de Responsabilidades Administrativas una previsión legal que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral del servicio público.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se busca adicionar el Artículo 57 Bis y el Artículo 57 Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar en la forma siguiente:

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan el Artículo 57 Bis y el Artículo 57 Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los términos siguientes:

Artículo 57 Bis. Comete hostigamiento sexual un servidor público que realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por la persona requerida, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el servicio público.

Artículo 57 Ter. Comete acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a un servidor público, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, para el servidor público. De igual forma, comete acoso sexual, el servidor público que, sin consentimiento y con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de un servidor público, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio.

Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo anterior.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean analizadas con el propósito de que previo dictamen, sean presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, planteada por las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la “Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 del mes de diciembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, planteada por las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la “Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, planteada por las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fue creada en 1975, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila y transferida a la esfera de competencia federal en el año 2006. Para que dicha transferencia pudiera concretarse, el Congreso del Estado de Coahuila abroga la Ley Orgánica de la citada Universidad, y desincorporó los activos de la misma a efecto de que constituyeran su patrimonio, según quedó asentado en el mismo decreto de abrogación.*

*El 26 de abril del año 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, no obstante, en esta nueva ley se omitió todo lo relativo a los pasivos laborales tales como el derecho a la pensión, jubilación y servicio médico, tanto de los trabajadores en activo y de quienes ya eran pensionados o beneficiarios. Así mismo se omitió lo contenido en la exposición de motivos del dictamen de la iniciativa aprobada, y que a la letra dice: “Las relaciones laborales de la Universidad quedan protegidos en base al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal del Trabajo, como se ha venido respetando durante los últimos treinta años, los cuales nunca serán en detrimento de estos”.*

*Siendo en principio una institución estatal, los trabajadores de la Universidad y al no ser transferidos los pasivos a la federación, los trabajadores continuaron aportando al Sistema de Seguridad Estatal.*

*Tal situación derivó en que la Universidad tenga en la actualidad dos sistemas de pensiones y de servicio médico distintos para sus trabajadores, pues una parte del personal de la institución cuenta con estas prestaciones en el IMSS, mientras que otra sigue estando bajo el sistema estatal Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado (DIPETRE) e Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila (ISMTEEC).*

*Al día de hoy, el 60% de los trabajadores de la Universidad están afiliados al IMSS y reciben el servicio médico y en su caso la pensión por este conducto, mientras que el restante 40% de los trabajadores es el rezago amparado en instituciones estatales, quienes continúan aportando a estos organismos, los cuales se encuentran actualmente en crisis financiera.*

*Esto además genera un problema que viola los principios de igualdad, equidad y justicia laboral, pues, aunque hagan el mismo trabajo sus beneficios como empleados no serán los mismos, discriminando a aquellos cuyo sistema pensionario o servicio médico es menos protector.*

*De ahí que para preservar estos principios constitucionales en materia laboral sea necesario que la norma jurídica prevea los mecanismos para lograr la migración efectiva de los trabajadores que aún siguen en los sistemas pensionarios y de servicio médico estatales a los del ámbito federal, con la finalidad de que sus derechos laborales sean ejercidos y respetados en condiciones de igualdad mirando siempre en función de la norma más protectora como lo sostiene el artículo 1º de nuestro máximo ordenamiento nacional.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa objeto del presente dictamen, de lo cual se desprende que tiene por finalidad proponer la adición del artículo quinto transitorio dentro de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en materia laboral.

En el año de 1923, fue fundada la Escuela Regional de Agricultura “Antonio Narro”, lo que obedeció primordialmente a la necesidad de contar con estudiantes y por ende, con profesionistas ampliamente capacitados en todas las disciplinas relacionadas con las labores del campo, posteriormente el 3 de marzo de 1975, se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante la cual se creó la Universidad como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila, misma que fue reformada el 14 de marzo del año 1989.

En fecha 26 de abril de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica de la citada Universidad, convirtiéndose oficialmente en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y dotada de autonomía, otorgándole la categoría de institución superior de carácter nacional, abrogándose así la ley estatal que se encontraba vigente.

Como se manifiesta en la exposición de motivos, “*En esta nueva ley se omitió todo lo relativo a los pasivos laborales tales como el derecho a la pensión, jubilación y servicio médico, tanto de los trabajadores en activo y de quienes ya eran pensionados o beneficiarios. Así mismo se omitió lo contenido en la exposición de motivos del dictamen de la iniciativa aprobada, y que a la letra dice: “Las relaciones laborales de la Universidad quedan protegidos en base al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal del Trabajo, como se ha venido respetando durante los últimos treinta años, los cuales nunca serán en detrimento de estos”.*

*“Siendo en principio una institución estatal, los trabajadores de la Universidad y al no ser transferidos los pasivos a la federación, los trabajadores continuaron aportando al Sistema de Seguridad Estatal”.*

Bajo esta tesitura, los que suscribimos la presente propuesta exponemos que, derivado de lo anterior actualmente existen dos sistemas de pensiones y de servicio médico distintos para los trabajadores de la Universidad Antonio Narro, ya que el 60% de ellos se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el 40% de los trabajadores sigue estando bajo el sistema estatal “Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado y del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila”.

Es por lo anteriormente expuesto que los integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura, preocupados por la seguridad social de los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, coincidimos en la importancia de adecuar la norma jurídica a fin de salvaguardar los principios de igualdad y justicia laboral, previendo mediante la presente propuesta de adición, mecanismos para hacer efectivo el traslado de los trabajadores que aún siguen en los sistemas pensionarios y de servicio médico estatales al del ámbito federal, respetando los derechos laborales y protegiendo uniformemente a todos los beneficiarios.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa para adicionar el artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se adiciona el artículo QUINTO transitorio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, para quedar como sigue:

**QUINTO.** El ejecutivo federal convendrá con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la migración de los trabajadores en activo de la universidad actualmente afiliados al sistema estatal de pensiones y servicio médico. Debiendo considerar en este convenio el servicio médico completo que presta el Instituto Mexicano de Seguro Social y las pensiones y jubilaciones en condiciones de igualdad con respecto a los trabajadores ya afiliados a dicha Institución. Reconociendo su antigüedad y los ingresos, que sirven de base para el cálculo de su pensión y jubilación y las demás prestaciones que legalmente correspondan. Lo anterior con estricto apego a los principios de igualdad, equidad y justicia que la Ley Federal del Trabajo declara.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 26 del mes de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 03 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“En los autores clásicos, al derecho se le define como el conjunto de normas jurídicas que permiten a las personas vivir en sociedad. En otras palabras, sin derecho no hay estado, y sin estado no existe la posibilidad de que las libertades de los individuos sean protegidas de forma eficaz.*

*El amparo también conocido como juicio de garantías, es un medio de control constitucional, que tiene como finalidad tutelar los derechos humanos de todas las personas e impedir o reparar las violaciones a los mismos. De igual forma, el amparo funciona como un mecanismo protector del texto constitucional y de los tratados internacionales de los que México es parte, pues puede derogar, inaplicar, suspender o modificar actos que no estén conformes con la citada normatividad.*

*No sobra decir que el amparo es una creación mexicana, derivada del pensamiento de los liberales del siglo XIX, como Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, quienes cada uno desde su aportación, lo concibieron como una forma de protección de los particulares frente a las autoridades y que, además, se ha extendido a través del derecho comparado a muchos otros países del mundo.*

*Como toda norma jurídica, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la ley de amparo, es un ordenamiento perfectible que ha ido cambiando de acuerdo con la evolución del sistema jurídico mexicano. En el año 2013, esta ley tuvo una reforma integral para adecuarla a los cambios constitucionales en materia de derechos humanos del año 2011.*

*En la reforma a la ley de amparo del año 2013, se incluyeron las diligencias que deben ser notificadas personalmente, el artículo 26 fracción I, del citado ordenamiento sostiene únicamente 12 causales en las cuales la notificación al quejoso se hace de manera personal las cuales son:*

*a) Al quejoso privado de su libertad.*

*b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;*

*c) Los requerimientos y prevenciones;*

*d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento;*

*e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional;*

*f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;*

*g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental;*

*h) La aclaración de sentencias ejecutorias;*

*i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva;*

*j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta;*

*k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y*

*l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos.*

*Como se puede observar, el inciso k) del citado artículo, da una amplia libertad a los jueces para notificar personalmente las diligencias que a juicio crean convenientes fuera de las establecidas por el ordenamiento, lo cual genera desde nuestra perspectiva una violación al principio de legalidad y al principio de igualdad, debido a que queda a juicio del órgano jurisdiccional, la decisión de notificar o no personalmente, las sentencias que resuelvan el fondo, las sentencias de sobreseimiento, los incidentes de falsedad de firmas y los incidentes de especial y previo pronunciamiento.*

*Dejando en algunos casos a los quejosos en situación de vulnerabilidad procesal o en estado de indefensión ya que los obligan a estar acudiendo continuamente a los juzgados o tribunales para literalmente “adivinar” si se ha dictado algún proveído por parte del órgano jurisdiccional.*

*De ahí que nuestra propuesta busque el reformar el artículo 26 fracción primera de la ley de amparo con el objetivo de agregar los casos en los que consideramos pertinente y necesario, que los juzgados, tribunales y demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, notifiquen personalmente a los quejosos con el fin de maximizar sus derechos procesales y otorgarles así una mayor seguridad jurídica.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa objeto de dictamen de lo cual se desprende que tiene por finalidad proponer una reforma al artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de notificaciones en Juicio de Amparo.

El amparo, también conocido como juicio de garantías, es un medio de control constitucional de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General.

El juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder dentro de un marco constitucional y de las autoridades gubernamentales, protegiendo así los derechos de las personas, garantizando la libertad de éstas frente al actuar arbitrario, que da como resultado un mecanismo de protección que debe ser amplio y el acceso a éste debe ser sencillo, para así garantizar el Estado de Derecho. En otras palabras el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de la materia.

En fecha 02 de abril del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo, con el fin de adecuarla a los cambios constitucionales en materia de derechos humanos, ampliando la esfera de éstos, así como coadyuvar en la eficiencia de la justicia en el país.

De lo anterior se desprende que, si bien el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos, la esencia del mismo sigue siendo la procuración de la protección de los derechos fundamentales - individuales.

Como se alude en la exposición de motivos, dentro de la reforma del año 2013, se incluyeron las diligencias que deben ser notificadas de manera personal dentro del artículo 26 fracción I, enlistando doce causales.

Actualmente el artículo anteriormente citado dispone lo siguiente:

***Artículo 26.*** *Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:*

***I. En forma personal:***

***a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones;***

***b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;***

***c) Los requerimientos y prevenciones;***

***d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento;***

***e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional;***

***f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;***

***g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental;***

***h) La aclaración de sentencias ejecutorias;***

***i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva;***

***j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta;***

***k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y***

***l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;***

***II.*** *Por oficio:*

***a)*** *A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo;*

***b)*** *A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y*

***c)*** *Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales.*

***III.*** *Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y*

***IV.*** *Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.*

Aunado a lo anterior, la promovente de la presente propuesta de reforma manifiesta que, “*como se puede observar, el inciso k) del citado artículo, da una amplia libertad a los jueces para notificar personalmente las diligencias que a juicio crean convenientes fuera de las establecidas por el ordenamiento, lo cual genera desde nuestra perspectiva una violación al principio de legalidad y al principio de igualdad, debido a que queda a juicio del órgano jurisdiccional, la decisión de notificar o no personalmente, las sentencias que resuelvan el fondo, las sentencias de sobreseimiento, los incidentes de falsedad de firmas y los incidentes de especial y previo pronunciamiento”.*

Es en este contexto, que los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con la ponente en reformar la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, con el objeto de adicionar casos en los cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deban notificar personalmente a los quejosos, adicionándose los siguientes:

* Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de falsedad de firma;
* Las resoluciones interlocutorias en las que se resuelvan incidentes de previo y especial pronunciamiento;
* Las resoluciones en las que se dicte el sobreseimiento; y
* Las sentencias dictadas que resuelvan el fondo del asunto.

Lo anterior, con la finalidad de maximizar los derechos procesales de las personas, para con ello garantizar la objetividad y la conformidad en los procesos de justicia, reduciendo los márgenes de discrecionalidad de las autoridades jurisdicciones y salvaguardando primordialmente los derechos de aquellas personas que pudieran encontrarse en estado de indefensión.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa para reformar el artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se reforma el artículo 26 fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

**Artículo 26.** …

1. …

**a)** a **l)** …

**m)** Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de falsedad de firma;

**n)** Las resoluciones interlocutorias en las que se resuelvan incidentes de previo y especial pronunciamiento;

**ñ)** Las resoluciones en las que se dicte el sobreseimiento; y

**o)** Las sentencias dictadas que resuelvan el fondo del asunto.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.”, y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 de septiembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“En los últimos años, la Comunidad Internacional ha reconocido que el cuidado de las antiguas y nuevas generaciones trasciende al ámbito público porque son indispensables para la preservación de la raza humana y la dignidad de quien en lo particular lo necesita, elevando a rango de derechos humanos la prerrogativa de recibirlos dada su gran importancia.*

*Estudios han revelado la gran importancia que tiene en nuestra sociedad el cuidado y su impacto – beneficio en la economía nacional.*

*Gran parte de las tareas de asistencia y cuidados se llevan a cabo, en primer plano, al interior de los hogares conformados por padres e hijos. Al momento de fracturarse la relación entre cónyuges, sobreviene la separación de la familia como tal, lo que deriva en un proceso de divorcio; resultado de ello se asigna el cuidado y custodia de los hijos menores de edad a alguno de los padres, es en éste periodo de suma importancia el proveer de la atención necesaria para el sano desarrollo de los infantes.*

*La madre o el padre, en quien recae la custodia de los hijos menores, debe realizar las tareas en el hogar, todas aquellas que involucran el buen funcionamiento del mismo y, por supuesto, el de tener a su cargo el cuidado de los menores, actividades que no son debidamente remuneradas, ello aun y cuando, a quien haya designado el Juez de la causa otorgar la custodia cuente o no con un trabajo fuera de casa.*

*Si bien es cierto es una obligación como padres de familia el de cuidar y proteger a nuestros hijos, debe considerarse que el cónyuge, al que el tribunal haya ordenado la obligación económica para proporcionar manutención aporte una cantidad adicional al concepto de pensión alimenticia a fin de compensar los cuidados y asistencia que requieren los menores.*

*Según la encuesta Nacional sobre uso de tiempo elaborada por INEGI, arroja estos datos preliminares en relación a la clase de actividad doméstica y el promedio de horas a la semana:*

*Para cocinar y preparar alimentos 11:48 horas,*

*En Apoyo en la cocina 3:24 horas,*

*En la limpieza de la vivienda 15:06 horas,*

*En la limpieza y cuidado de ropa y calzado 7:36 horas,*

*Para compras para el hogar 3:42 horas,*

*En la administración del hogar 2:18 horas y*

*Para pagar trámites de servicios 1:36.*

*Dicha institución señala que en México el trabajo doméstico no remunerado tiene un valor de 4.4 billones de pesos, que equivalen al 24.2 % del producto interno bruto (PIB) Las labores que se realizan al interior de los hogares en el país equivalen a una cuarta parte de la economía nacional, comparativamente genera tanta riqueza como la industria y la minería juntas.*

*Es también cierto que, atendiendo a estadísticas, buena parte de las tareas de cuidados y asistencia que se llevan a cabo al interior de los hogares se encuentra en mayor porcentaje a cargo de las mujeres, pero no debemos dejar de considerar que nuestra sociedad está en constante evolución y, que de igual forma, se han registrado muchos casos en los que el cónyuge varón es quien lleva a cabo las tareas propias del tema que nos ocupa, por lo que es menester abarcar tal supuesto, entendiéndose que, ya sea la madre o padre quien se encargue del cuidado de los menores la mayor parte de su tiempo, independientemente de aportar ingresos económicos derivados de un trabajo exterior, también lo hace aportando los cuidados necesarios para el bienestar de los menores.*

*No obstante que el trabajo doméstico no remunerado es fundamental para el bienestar y el desarrollo de los integrantes de una familia, cuando se trata de los Juicios en orden Familiar, los juzgadores al momento de resolver simplemente no hacen ninguna referencia al respecto.*

*La presente iniciativa de ley propone que se incluya dentro del concepto de los alimentos los trabajos de cuidado y asistencia especial toda vez que esto constituye parte de los derechos humanos de la niñez, lo que se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna en su artículo 4to, séptimo párrafo, que a la letra dice “… los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”*

*De igual forma diversos tratados internacionales, entre ellos La Convención Americana de Derechos Humanos establece dentro de su artículo 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”*

*Nuestro objetivo es dejar establecido que los trabajos de cuidados y de asistencia especial que requiera el titular del derecho a recibir alimentos, sean cuantificados dentro de la pensión alimenticia, así como de los mecanismos jurídicos que permitan garantizar sobre todo, el derecho a la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, considerando el derecho a la equivalencia en las responsabilidades familiares, mismas que se encuentran protegidas de igual forma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del primer párrafo del artículo 4°: “El varón y la mujer son iguales ante la ley” y, en la Convención citada con anterioridad, artículo 17, numeral 4:**“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…….Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.*

* *Dentro de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, se encuentra ya dispuesto que el propósito de ésta es el de garantizar la convivencia estable de sus miembros, la ayuda mutua, la satisfacción de necesidades de subsistencia cuando corresponda. (artículo 2).*
* *No quiero omitir señalar que el Congreso Nacional de Perú, en fecha 8 de marzo del 2017, sienta un precedente al aprobar la ley que obliga a los jueces a considerar como aporte económico, el trabajo realizado por la persona a cargo del cuidado de los hijos a efecto de que este sea considerado al momento de fijar la cantidad respecto a la pensión alimenticia.*

*El Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila con la presente iniciativa somete a consideración de este H. Congreso del Estado para su revisión, análisis y en su caso aprobación, la modificación del primer párrafo y adición de un segundo párrafo al artículo 276 de la Ley Para La Familia de Coahuila de Zaragoza, a fin de incorporar el derecho al cuidado y asistencia como parte de los alimentos y su cuantificación en la pensión alimenticia con el fin de dar protección y seguridad a los menores a cargo del cónyuge a quien los tribunales hayan otorgado la custodia en un procedimiento de divorcio y con ello cumplimentar las disposiciones constitucionales e Internacionales de la materia que nos ocupa.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión, realizamos el estudio del objeto y contenido de la iniciativa que se dictamina, verificando que la misma, tiene por finalidad incluir dentro del concepto de los alimentos los trabajos de cuidado y asistencia especial.

En este sentido se plantea la modificación del artículo 276 de la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Entre los principales argumentos que sirven de soporte al proyecto normativo, los promoventes refieren que “s*i bien es cierto es una obligación como padres de familia el de cuidar y proteger a nuestros hijos, debe considerarse que el cónyuge, al que el tribunal haya ordenado la obligación económica para proporcionar manutención aporte una cantidad adicional al concepto de pensión alimenticia a fin de compensar los cuidados y asistencia que requieren los menores”.*

En este orden de ideas, los iniciadores refieren que de acuerdo a la encuesta Nacional sobre uso de tiempo elaborada por INEGI, se invierte una cantidad considerable de tiempo a la semana destinado actividades domésticas como las siguientes:

*“Para cocinar y preparar alimentos 11:48 horas, en Apoyo en la cocina 3:24 horas, en la limpieza de la vivienda 15:06 horas, en la limpieza y cuidado de ropa y calzado 7:36 horas, para compras para el hogar 3:42 horas, en la administración del hogar 2:18 horas y para pagar trámites de servicios 1:36”.*

Así, el mismo INEGI *“señala que en México el trabajo doméstico no remunerado tiene un valor de 4.4 billones de pesos, que equivalen al 24.2 % del producto interno bruto (PIB) Las labores que se realizan al interior de los hogares en el país equivalen a una cuarta parte de la economía nacional, comparativamente genera tanta riqueza como la industria y la minería juntas”.*

Quienes dictaminamos, una vez efectuado el estudio y análisis de la iniciativa, coincidimos en que la medida es acorde al principio del interés superior del menor, y de los recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a lo que coloquialmente se conoce como *“doble jornada”,* en los cuales el Supremo Tribunal ha dejado de manifiesto que la imperiosa necesidad de *“reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad*, *asegurando la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges*, y que “*el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, deben ser ponderados a efecto de determinar el monto o porcentaje de la eventual compensación*”. (Amparo directo en revisión 4883/2017)

En este orden de ideas, consideramos que la norma beneficiará a los acreedores alimenticios al proveérseles de mejores cuidados, y al mismo tiempo coadyuvará a subsanar el desequilibrio que puede existir dentro de las familias derivado de que uno de sus miembros asumió determinadas cargas domésticas y de cuidado en mayor medida, promoviéndose una sociedad más justa y más igualitaria.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO. -** Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 276.** Para los efectos legales se entiende por alimentos: la alimentación nutritiva, el vestido, la habitación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, los gastos relativos al embarazo y el parto, la recreación, así como los cuidados y asistencia que requiera el acreedor alimentario en lo particular. Respecto de las niñas y niños los alimentos comprenden los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista, su recreación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

En Relación al trabajo de cuidado y asistencia en favor del acreedor alimentario, deberá ser considerado como un aporte económico a quien lo realiza en el debido cumplimiento de las obligaciones alimenticias, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el juez de la causa al momento de fijar la pensión alimenticia.

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza,suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza,suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza,suscrita por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“En nuestro país la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultos Mayores da esta calidad a aquellas personas que tienen sesenta años y más.*

*En algunos años más seremos una población en su mayoría de adultos mayores.*

*La Organización Mundial de la Salud destaca que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.*

*“El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad”.*

*De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) México ha experimentado una profunda transformación demográfica, la estructura por edades de la población ha cambiado, pasando de una población predominantemente de menores de 15 años a una de jóvenes. Y esto ha hecho que paulatinamente se ha acumulado una mayor cantidad de personas de 60 y más años, debido a la mayor esperanza de vida.*

*En Coahuila casi 300 mil personas son adultas mayores y tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 3.7%.*

*De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de las personas Adultos Mayores en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2019, destaca que nuestro país experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta años cambiará radicalmente su composición socio demográfica.*

*“Se trata de una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayores”.*

*México ha tenido a bien firmar y poner en práctica diversos acuerdos internacionales para garantizar los Derechos Humanos de las personas adultas mayores.*

*Por otro lado, en Coahuila hemos tenido avances importantes en el marco legislativo con la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Coahuila, con las sanciones a quienes les maltraten y con la creación de un Programa Estatal que de manera transversal obliga a las diversas Secretarías del Estado a ejercer política pública en su favor.*

*Y esto tiene que ver con compromisos nacionales e internacionales.*

*La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores en su Artículo 9 establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.*

*En dicho documento se incluye el derecho a la seguridad, a recibir un trato digno, y a ser respetados(as) y valorado(as). Define la violencia como “cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado”, y otros tipos de abuso como el financiero, patrimonial, maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, “ la expulsión de su comunidad, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.*

*La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que en México: “Las personas mayores son particularmente vulnerables a enfrentar situaciones que anulan o menoscaban su dignidad, y su carácter de sujetos de derechos humanos, las cuales constituyen un obstáculo para que disfruten de una vida plena, se garantice el acceso a sus derechos y sean tomadas en cuenta como agentes autónomos participativos en su familia, comunidad y Estado.”*

*El panorama que nos muestra sobre las agresiones de las cuales son víctimas los adultos mayores por familiares, instituciones e inclusive cuidadores debe llevarnos a realizar acciones en varios sentidos: garantizar sus derechos y fortalecer una cultura de respeto e inclusión.*

*A nivel nacional las personas adultas mayores son víctimas de delito patrimoniales, violencia familiar, lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, violación y homicidios. De ellos 55% son hombres y 45% mujeres en edades de 60 a 70 años, 22% de 71 a 80 años.*

*En México, 20 por ciento de los adultos mayores vive en soledad y 16 por ciento sufre rasgos de abandono y maltrato, asegura la investigadora de la UNAM, Margarita Maass Moreno. También afirma que estas condiciones en el adulto mayor son más patentes en está sociedad que se caracteriza por estar sumergida en procesos de deshumanización en muchos sentidos.*

*El aislamiento, maltrato y vulneración de la tercera edad en México es poco visible, pero no por ello menor y menos importante.*

*La presente iniciativa está dirigida a que sea considerado el estado de vulnerabilidad de los adultos mayores como un agravante en la penalización de los Delitos contra la integridad corporal, es decir cualquier tipo de violencia hacia las personas adultas mayores.*

*Este tipo de violencia que por desgracia está muy instalado en nuestra sociedad actual, pocas ocasiones brota a la luz pública. La vergüenza social, la ignorancia de los trámites a seguir para denunciar maltrato y la poca empatía y sensibilidad de las autoridades para su atención.*

*El maltrato de acuerdo a la Institución Nacional de las Personas Adultas Mayores se define como: “Una acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y produzca daño o angustia a una persona adulta mayor.*

*Las consecuencias de cualquier lesión o maltrato físico a los adultos mayores son de suma importancia al tratarse de personas físicamente más frágiles. Sus huesos son más quebradizos y con largos procesos de convalecencia, inclusive una lesión que puede ser leve, para ellos puede causar daños graves y permanentes.*

*Hemos olvidado que los adultos mayores representan la experiencia y la sabiduría adquirida a través de los años. Son nuestras raíces, testigos del pasado y piedra angular de la familia. Son aquellos hombres y mujeres cuyas fuerzas están en ocasiones agotadas, sin embargo, su corazón acumula juventud. Pero sobre todo debemos recordar que son seres humanos dignos y sujetos de derechos.*

*Debemos sensibilizarnos como familiares, autoridades y ciudadanos sobre la importancia del respeto de cada uno de los derechos de las personas adultas mayores.*

*Aunque el maltrato a adultos mayores a comenzado a ganar visibilidad, es uno de los grupos vulnerables de nuestra sociedad que se ha mantenido en un segundo plano históricamente; en comparación con los niños, los adolescentes y las mujeres, aun y cuando es un grupo de la población que sufre múltiples dificultades, razón por la cual se les debe asegurar una atención integral, participación social y una vida libre de violencia.*

*El maltrato a adultos mayores debe poner en foco rojo las acciones que como autoridades realizamos para prevenir y combatirlo.*

*No olvidemos que el envejecimiento no es una enfermedad, es simplemente el pasar de los años en nuestro cuerpo, es la disminución en nuestro sistema inmunológico, el deterioro del intelecto, la discapacidad visual y auditiva entre otras cosas, es sencillamente una parte natural del ciclo de la vida.*

*En Unidad Democrática creemos que es fundamental sensibilizarnos y visibilizar la violencia en todos los sentidos contra los adultos mayores de tal manera que nos permita realizar acciones para castigarla, erradicarla y fortalecer así los derechos de los adultos mayores.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta dictaminadora, efectuamos el estudio del objeto y contenido de la iniciativa que se dictamina, verificando que la misma, tiene por finalidad la de aumentar las penas en *una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones, según las mismas de que se trate conforme al artículo 200 de este Código, a quien se las infiera a una persona adulta mayor de 60 años o más.*

En este sentido se plantea la modificación del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Entre los principales argumentos que sirven de soporte al proyecto normativo los promoventes refieren que “de acuerdo a datos de laComisión Nacional de Derechos Humanos refiere que en México *“las personas mayores son particularmente vulnerables a enfrentar situaciones que anulan o menoscaban su dignidad, y su carácter de sujetos de derechos humanos, las cuales constituyen un obstáculo para que disfruten de una vida plena, se garantice el acceso a sus derechos y sean tomadas en cuenta como agentes autónomos participativos en su familia, comunidad y Estado.”*

*Del* mismo modo los iniciadores señalan que su propuesta tienesustento en compromisos internacionales que ha contraído el Estado Mexicano, aludiendo específicamente a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores en su Artículo 9 establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, documente en el que *“se incluye el derecho a la seguridad, a recibir un trato digno, y a ser respetados(as) y valorado(as)”,* y quedefine la violencia como *“cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado”, y otros tipos de abuso como el financiero, patrimonial, maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, “ la expulsión de su comunidad, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.*

Quienes dictaminamos estamos plenamente convencidos de que es nuestro deber como legisladores, emitir la normativa necesaria a efecto de proteger a los sectores más vulnerables de la población y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En este orden de ideas consideramos coincidamos con los promoventes en la necesidad de aumentar las penas en una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones, según las mismas de que se trate conforme al artículo 200 del Código Penal, a quien se las infiera a una persona adulta mayor de 60 años o más.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO. -** Se adiciona un último párrafo al artículo 201 del Código Penal de Coahuila De Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 201** …

*…*

*…*

*…*

*…*

*…*

*…*

…

Se aumentará en una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones, según las mismas de que se trate conforme al artículo 200 de este Código, a quien se las infiera a una persona adulta mayor de 60 años o más.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** La publicación referida en el artículo transitorio primero deberá hacerse una vez que haza entrado en vigor el Decreto 403, de 2019.

**TERCERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 17 de Julio de 2018, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, y se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia a efecto de que se pronunciara con respecto a su procedencia en términos de lo dispuesto por los artículos 42, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 de Diciembre de 2018, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura de este H. Congreso, en el que se declara que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, reunía todos los requisitos previstos en el artículo 42.

**TERCERO.-** Que en misma fecha el pleno de este H. Congreso determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

**CUARTO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo el día 22 de enero del año 2019 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez.

**QUINTO.-** En reunión celebrada el día 30 de octubre del presente año por la Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se aprobó un Acuerdo mediante el cual se determinó girar invitación a su persona a una reunión de trabajo que tendría verificativo el día miércoles 06 de noviembre del 2019 a las 9:00 horas, en la sala de la Junta de Gobierno de este H. Congreso.

**SEXTO.-** Que en atención a lo previsto porel artículo 43 fracción II numeral 7 de la ley de participación ciudadana del estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos y aplicables de la ley orgánica del congreso del estado, el 06 de noviembre del 2019 a las 9:00 horas, se celebró una Reunión de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en la cual se contó con la presencia del C. Agustín Javier Durón Pérez, quien expuso a los integrantes de esta dictaminadora los motivos, fundamentos, contenido y alcances de la iniciativa popular por él suscrita, y participó en la discusión de la misma, respondiendo a los diversos cuestionamientos de las diputadas y diputados; y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita, por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, se basa en la siguiente:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“****AGUSTIN JAVIER DURON PÉREZ****, ciudadano coahuilense, lo cual acredito con acta de nacimiento certificada con identificador electrónico y código de verificación adjunta que exhibo bajo protesta de decir verdad, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Saltillo, Coahuila el ubicado en Apolonio M. Aviles 895 interior 5, colonia Los Maestros y autorizando a CARLOS ALEJANDRO BELTRAN CASTILLA para oírlas y recibirlas y quien estará facultado para realizar los actos correspondientes al trámite de esta iniciativa popular, comparece y expone:*

* *Que anteriormente mandé esta misma iniciativa la cual aparece en el informe de correspondencia de 3 de julio de 2018, omitiendo adjuntar mi acta de nacimiento, por lo que para efecto de no dilatar el procedimiento legislativo y malgastar el tiempo de nuestros representantes, solicito se tenga dicho escrito por no presentado y se tome en cuenta este nuevo con el mismo texto, pero añadida la constancia del acta de nacimiento que me acredita como ciudadano coahuilense, y con ella y la facultad que me confiere el artículo 59 fracción VI de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA y fundando mi petición en los requisitos cumplidos del artículo 42 de la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, someto a la consideración de este HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA la siguiente iniciativa popular en materia penal basada en la siguiente exposición de motivos:*

*Actualmente el código penal califica la riña como “La riña es el ejercicio de la violencia que se acepta de manera. expresa o tácita por quienes intervienen en ella”, o sea, que si una persona llega y golpea a otra, esa otra, al devolver el golpe esta aceptando de manera tácita un ejercicio de violencia, y así se califica normalmente. Esto crea un conflicto al momento de defenderse o defender a otros, pues la línea entre la riña y la legítima defensa no es clara en la legislación penal o peor, es demasiado amplia hacía la riña y muy restringida en cuanto a la legítima defensa, aún los criterios actuales a nivel federal son tan grises como los siguientes:*

***REGISTRO: 211920. RIÑA. LEGITIMA DEFENSA.***

*La riña excluye la legítima defensa, ya que en la primera los adversarios se colocan en un mismo plano de ilicitud de la conducta, en tanto que en la segunda la acción defensiva es lícita.*

***REGISTRO: 230179. LEGITIMA DEFENSA Y HOMICIDIO EN RIÑA. NO PUEDEN COEXISTIR.***

*A virtud de que en la ejecución de los hechos tanto el ofendido, como el sujeto activo, se colocan en una situación de ilicitud al aceptar la contienda de obra que tuvo como consecuencia la muerte del ofendido, independientemente de que se reconoció al autor del ilícito el carácter de provocado, de ninguna manera puede hablarse de legítima defensa.*

***REGISTRO: 234585. LEGITIMA DEFENSA Y NO RIÑA.***

*La actitud defensiva o de rechazo a una agresión violenta, injusta actual y generadora de inminente peligro, no constituye la modificativa de riña si, en el caso considerado, aun cuando haya ímpetu lesivo de parte del inculpado, éste solo trate, mediante esa forma de actuar, de suprimir el peligra corrido por su vida y su integridad física y no de colocarse, en la contienda, en el mismo plano de ilicitud que su agresor.*

***REGISTRO: 234843. RIÑA. ACEPTACION DE LA CONTIENDA COMO ELEMENTO CARACTERISTICO.***

*Si bien es cierto que en la legítima defensa puede haber un momento de intercambio de acciones lesivas con el consiguiente peligro mutuo, también lo es que hay un signo distintivo esencial en relación a la riña. En ésta hay un ánimo manifiesto de contender en los protagonistas; es decir, se parte de la aceptación mutua de la violencia. En cambio, en el rechazo de la legítima defensa, el origen no es esa aceptación de practicar la violencia, sino la acción consistente en anular u.na injusta agresión súbita.*

*Por lo que es claro que se requieren criterios de jueces federales para interpretar leyes que deberían ser más simples y sencillas, además de no causar a quien se defiende de una agresión que se le acuse de cometer daños en riña, pues muchas veces no existe una riña sino una persona defendiéndose de un agresor, y sólo los más pobres de la sociedad no pueden defenderse cuando se les acusa de riña cuando esta no existió, o también, obliga a la cobardía, pues se obliga a intentar huir o evitar una agresión para poder acreditar que no había deseo de una riña, lo cual es injusto y nunca fue el deseo de nuestra sociedad crear generaciones de pusilánimes que cuando son agredidos tienen que escapar, para evitar ser acusados de ilícitos. Entendemos bien lo que es una riña, es un acuerdo de voluntades en las que no hay una amenaza ci agresión previa, es decir, llega una persona y reta a otra a los golpes, sin amenazarla ni golpearla primero, y la otra, acepta sin haber sufrido amenaza o agresión física alguna. Basta que se haya sufrido una agresión física o amenaza de ella sin provocación inmediatamente anterior, para que ya no se de la riña si la persona provocada decide defenderse, y así debe preverse en la legislación penal, sin obligar a huir ni a evitar la agresión. El articulado que se propone combate este problema dando una definición de legítima defensa más amplia y clara, así como una definición de riña que prevé que si una de las partes entró en el conflicto por haber sido amenazado o agredido, no se le podrá acusar de haber aceptado participar en riña.”*

**TERCERO.-**Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, analizamos detenidamente las consideraciones y disposiciones en las que se funda y motiva el proyecto de decreto, objeto la modificación de los artículos 59 y 349, en el sentido en el que a continuación se señala:

* ***“Artículo* 59.-...**
* ***…***
* **…**
* **…**
* ***I.- …***
* ***II.*** *(Defensa legítima). Se justifica el uso de la fuerza en contra de otro u otros cuando en la medida que sea razonablemente necesario protegerse contra el intento o uso de fuerza ilegal.*
* *Se presume razonable el uso de la fuerza cuando se repela una agresión antijurídica, actual o inminente, a bienes jurídicos propios o ajenos, siempre y cuando sea razonablemente necesaria la defensa de que se trate desde el punto de vista del agredido. Se presume fuerza necesaria cualquiera usada en contra de un agresor armado o que razonablemente parezca estar armado, o cuando la diferencia de fuerza o pericia entre el agresor y quien se defiende sea tal que el agresor no requiera armas para herir de gravedad, violentar sexual mente o causar muerte al agredido o a alguien más; además, respecto de la misma no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de quien aparente su defensa. Asimismo, se estimará que hay defensa legítima, si el agredido lesiona a quien lo agredió antijurídicamente, estando todavía en peligro de que la agresión se reanude enseguida de repelerla y respecto de aquella conducta en que se cumplan los demás requisitos de dicha causa de licitud.*
* *Cuando una persona tenga derecho de estar en un lugar, no haya provocado en ese momento al agresor y no se encuentra cometiendo ilícito alguno en el momento de la agresión, no está obligado a huir ni a intentar evitar la agresión antes de usar la fuerza para defenderse.*

*ARTÍCULO* 349. *CONCEPTO DE RIÑA. La riña es el ejercicio de la violencia que se acepta de manera expresa* o *tácita por quienes intervienen en ella, cuando dicha aceptación se hace sin que haya una amenaza* o *una agresión física previa. Cuando exista amenaza de agresión física* o *agresión física inmediatamente antes del conflicto, quien la recibió podrá defenderse legítimamente y no se considerará riña.”*

De la revisión que efectuamos los integrantes de la presente comisión dictaminadora, se verificó que la propuesta de reforma implica la modificación de disposiciones del Código publicado en el Periódico Oficial, el viernes 28 de mayo de 1999, ordenamiento abrogado en fecha el 26 de noviembre de 2017, en virtud de la emisión de un Nuevo Código Penal, que fue Publicado en el Periódico Oficial el día 27 de octubre de 2017, ordenamiento que previó*en su régimen transitorio lo siguiente:*

***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

***ARTÍCULO SEGUNDO.*** *El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes contados a partir del día posterior al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

***ARTÍCULO TERCERO.*** *Desde el día que inicie su vigencia este Código, quedará abrogado el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza contenido en el Decreto N° 298, que se publicó el 28 de mayo de 1999 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como también quedarán derogadas todas sus reformas, a excepción de sus artículos del 212 BIS al 212 BIS 6 que continuarán vigentes de conformidad con el transitorio tercero de la reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015.*

En este sentido, se observa que, de acuerdo a lo referido en el Diccionario Universal de términos parlamentarios, el vocablo abrogación deriva del latín abrogatio, abrogationis. El verbo tranistivo *abrogar* proviene de abrogare, palabra compuesta por el prefijo ab en sentido de negación y rogatio, petición. Dejar sin efecto jurídico una disposición legal.

En un sentido general, el término se refiere a la abolición, abolición, revocación y anulación de una ley, un Código, un Reglamento o un precepto.

En el lenguaje jurídico, el término abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de la Ley, Código o Reglamento, la terminología jurídica y técnica.

De conformidad a lo plasmado en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, se entiende por abrogar:

*Acción de dejar sin efecto jurídico un cuerpo legislativo completo (a diferencia de la derogación que se refiere a parcialidades de una norma): ley, código, reglamento, bando, artículo, disposición legal, etc. En el sistema jurídico mexicano puede presuponer que una norma sea anulada o revocada expresamente por otra mediante el proceso legislativo contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
  
Existen dos tipos de abrogación: 1) expresa, que se refiere a la definición incluida dentro de los artículos transitorios de una ley en la que se declara directamente abrogada otra ley anterior; y, 2) tácita, que se refiere a la abrogación de una ley en virtud de la incompatibilidad entre los preceptos de un nuevo ordenamiento y otro existente.   
  
La abrogación implica un cambio de sistemas jurídicos por medio de la sustracción de normas, lo que tiene que ver con la afectación ya sea de validez, vigencia, eficacia o extinción de una norma jurídica.*

Hechas estas consideraciones, quienes dictaminamos coincidimos en que la reforma en los términos planteados no es procedente, dado que estamos imposibilitados de reformar un ordenamiento que ya no es parte de nuestro sistema de normas.

Por lo anteriormente expuesto, es que los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideramos procedente emitir el siguiente:

**DICTAMEN**

**PRIMERO.-** Se considera no procedente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59 fracción II y artículo 349, ambos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA LECTURA Y TRÁMITE DE LOS DICTAMENES RELATIVOS A LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE; ACUÑA, ALLENDE, CASTAÑOS, CUATRO CIÉNEGAS, GENERAL CEPEDA, GUERRERO, MONCLOVA, MORELOS, MÚZQUIZ, NAVA, PARRAS, PIEDRAS NEGRAS, RAMOS ARIZPE, SALTILLO, TORREÓN, VIESCA, VILLA UNIÓN Y ZARAGOZA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, es facultad del Congreso del Estado, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los municipios del Estado.

Atendiendo a lo antes señalado y en cumplimiento de lo establecido en los ordenamientos antes citados, los Ayuntamientos de los municipios del Estado, hicieron llegar al Congreso del Estado sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020; Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, dichas iniciativas y propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda, para su estudio y posterior dictamen.

Al proceder a lo antes señalado, la Comisión de Hacienda realizó el análisis de las iniciativas de leyes de Ingresos municipales, considerando, entre otros aspectos, la verificación de su presentación en tiempo por parte de los municipios; la realización de un estudio comparativo de los montos y rubros propuestos en dichas iniciativas, con los contenidos en las leyes del ejercicio fiscal anterior; la procedencia de la inclusión de nuevas contribuciones, y la revisión del Presupuesto de Ingresos presentado por cada Municipio, a fin de conocer la recaudación estimada en base a las mismas iniciativas.

Después de la revisión y análisis de las iniciativas y de las propuestas antes referidas, se procedió a la formulación de los dictámenes que contienen el Proyecto de Ley de Ingresos de cada municipio, los cuales fueron finalmente aprobados en el seno de la Comisión de Hacienda.

En virtud de que los mencionados dictámenes han quedado a disposición de los integrantes de la Legislatura en internet, a través de la Gaceta Parlamentaria publicada en la página oficial del Congreso del Estado, en mi carácter de Coordinadora de la Comisión de Hacienda, considero procedente proponer que se autorice un mecanismo que facilite la lectura y trámite de dichos dictámenes; por lo que, con apoyo en lo dispuesto en los Artículos 82, 83, 88 fracción IV, 92 fracción II, 116, 119 Y 184 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, someto a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE ACUERDO**

**UNICO.** Se aprueba la dispensa de la lectura integral de los Dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda, con relación a las Iniciativas de Leyes Ingresos de los Municipios de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

Por tanto, se autoriza que, en lo correspondiente a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal de 2020, se proceda solamente a la lectura de un dictamen resumido en lo que se hace referencia a los criterios generales establecidos para determinar la actualización de las contribuciones y a los rubros de Titulo, Capitulo, y Sección de cada ley, para posteriormente pasar a la discusión y, en su caso, aprobación de dichas leyes, conforme a lo planteado en dichos dictámenes.

**A T E N T A M E N T E**

**SALTILLO, COAHUILA, A 11 DE DICIEMBRE DE 2019**

**DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**

**COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA**

**DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DICTAMEN** de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO.** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 en su fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, es facultad del Congreso del Estado, *“Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal”.*

*“Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el Artículo 158-T de esta Constitución, para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan”.*

**SEGUNDO.** Por su parte el Artículo 158 U fracción V de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala las competencias, facultades y obligaciones del Municipio en materia de hacienda pública municipal entre las que destaca: “*Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal”.*

***TERCERO.***  *De igual forma, el Artículo 28 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala que: “Las iniciativas de las leyes de ingresos de los Municipios se formularán de conformidad con este código y demás disposiciones aplicables, y serán presentadas al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre de cada año. Estas iniciativas se remitirán acompañadas del presupuesto de ingresos para su discusión, aprobación en su caso y publicación en el Periódico Oficial del Estado”.*

**CUARTO.** En tal orden de ideas, se advierte que los Ayuntamientos de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, hicieron llegar a este Congreso, su respectiva Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, misma que fue turnada a esta Comisión de Hacienda, para su estudio y posterior dictamen.

En tal orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Monclova y Parras Coahuila de Zaragoza, omitió hacer llegar a este Congreso, su respectiva Iniciativa de Ley de Ingresos, por lo que esta Comisión de Hacienda, realiza un análisis de la Ley de ingresos 2019, de aplicación para el ejercicio fiscal 2020, realizando las actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de esta Constitución, para su estudio y posterior dictamen.

Ello es así, ya que la ley de ingresos (2019) cuya vigencia se amplió no constituye un nuevo acto legislativo, pues no la abrogó otra dictada conforme al procedimiento y a las formalidades que dieron nacimiento a aquélla.

En ese contexto y ante la omisión de los Ayuntamientos de Monclova y Parras, Coahuila de Zaragoza, y a fin de no causar perjuicio a la Hacienda Pública Municipal , en mérito de lo anterior, por mandato de ley la normativa denominada Ley de Ingresos de los Municipios de Monclova y Parras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal del año 2019, se determina que su vigencia se extiende por mandato de ley al ejercicio fiscal 2020, en razón de la falta de iniciativa y expedición de la ley correspondiente, por lo que se prolonga su vigencia para aplicación para el ejercicio fiscal 2020, ello con fundamento en los artículos 158-P, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sus correspondientes actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de esta Constitución, para su estudio y posterior dictamen.

**QUINTO.** Que al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, esta Comisión de Hacienda, consideró necesario acatar lo dispuesto en el Artículo 158-B de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza que señala*: “El Municipio Libre es un orden constitucional de gobierno natural y autónomo con personalidad jurídica plena y patrimonio propio”* y 158-C: *“La autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de su competencia municipal y sin interferencia de otros poderes”*

**SEXTO.** En atención a lo anterior, al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, esta Comisión de Hacienda consideró justificado que, para el ejercicio fiscal del año 2020, se autorizaran nuevos impuestos o derechos que estuvieran contemplados en el Código Financiero para los Municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SÉPTIMO.** Esta Comisión de Hacienda, consciente de la situación económica por la que atraviesa el país, recomendó a los Municipios no rebasar el incremento inflacionario proyectado al cierre del presente ejercicio fiscal, principalmente en aquellos renglones que afectaran a las clases más desfavorecidas. En virtud de lo anterior, los Municipios acordaron un incremento de hasta un 4.5% en la mayoría de los rubros, y se autorizó incrementos superiores, en algunos casos específicos superiores al 4.5%, en los demás rubros se seguirá cobrando lo mismo que el año anterior.

Algunos municipios según lo establece el Código Financiero para los Municipios de Estado de Coahuila de Zaragoza, incluyeron cobros nuevos en sus respectivas leyes municipales.

Algunos municipios acordaron la tarifa correspondiente al Derecho de Alumbrado Público, de acuerdo a la fórmula que se presenta en esta Ley de Ingresos.

Así como incluir las tarifas correspondientes al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con el acuerdo de que las tarifas podrán sufrir incrementos de acuerdo al índice inflacionario (INPC), durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Además, los Municipios de; Allende, Castaños, General Cepeda, Nadadores y Zaragoza estipulan montos de financiamiento y endeudamiento para la contratación de créditos de empréstitos, de acuerdo a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por otra parte, la mayoría de los Municipios acordaron otorgar un incentivo del 15% en el pago de impuesto predial por pronto pago, a las personas que lo realicen durante el mes de enero, 10% en el mes de febrero y el 5% en el mes de marzo, con objeto de estimular su pronta recaudación; asimismo, con objeto de favorecer a los pensionados, jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, determinó proponer la aplicación de un incentivo del orden del 50% en el pago del impuesto predial, circunscribiendo este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en que habitualmente residan los beneficiarios de este incentivo, por lo antes mencionado, se autoriza en la ley de ingresos incentivos en diversos rubros. En Actividades Mercantiles se exceptúa el cobro a las personas físicas que sean voceadores de periódicos y que tengan como actividad preponderante la venta de periódicos. Lo anterior por considerarse una actividad que contribuye al ejercicio de la libertad de expresión al mismo tiempo que fomenta el derecho a la información y a la lectura.

Ahora bien, como se puede apreciar en la iniciativa sujeta a dictamen, se establecen en algunas de las contribuciones aquí previstas, un trato diferenciado entre quienes se ubican en el mismo supuesto de causación; la razón que ello se dé y que por ende, ciertos causantes deban pagar diversos derechos o tasas de impuestos, aún y cuando sea el mismo acto sobre el cual deviene la imposición tributaria, se debe a que, como ya ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “… *el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales)…”,* supuesto que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues es preocupación de la administración municipal y de la Legislatura Estatal, mejorar la satisfacción de los fines fiscales, es decir, la contribución al gasto público, pero también existe un fin extrafiscal consistente en el uso del pago de derechos para impulsar una política financiera de saneamiento de la hacienda pública municipal.

Ello se logra mediante la imposición de una contribución diferenciada, en especial, en el caso de los derechos de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que si bien como contribución, corresponden a una contraprestación, también es verdad que su naturaleza resulta ser una contribución fiscal, que no tiene su origen en ámbito privado, sino que es un servicio de carácter público, como ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se realiza con motivo de las funciones públicas municipales orientadas a la promoción de desarrollo de ciertas actividades públicas, y muy en especial de las relativas a la planeación urbana, por lo que es un servicio público, y constituye ciertamente una actividad municipal individualizada, concreta y determinada, respecto de la cual se establece una relación singularizada entre la administración pública municipal y los beneficiarios de este servicio, que para cuya satisfacción existe ciertamente un costo, pero que puede diferenciarse, atendiendo a la necesidad del municipio de allegarse de mayores recursos, considerando que las personas físicas o morales que tienen mayores recursos realizan actividades de registro con cantidad mayores a las que realizan los ciudadanos sujetos a menor salario, por lo que al cobrar mayores derechos a quienes realizan actividades de mayor monto, se fortalece a la hacienda municipal y se permite atender mejor a la sociedad en general, en especial, en estos momentos de crisis hacendaria donde las necesidades aumentan y los recursos fiscales, no crecen en la misma proporción; por ello, y toda vez que el desarrollo urbano y la planeación territorial son facultades otorgadas a los municipios en los términos del artículo 115 fracción V Constitucional, es menester que en uso de la potestad tributaria prevista en el artículo 115 fracción IV de la Carta Magna, se establezcan los cobros diferenciados del derecho en la forma establecida en la iniciativa, a efecto de dotar a la Hacienda Municipal, de recursos necesarios para atender en forma, esta responsabilidad constitucional.

Igualmente hay que puntualizar que el cobro de derechos, aún en el caso de los montos superiores conserva moderación y que, al realizarlo de esta forma, implica que a los iguales se les trata igual y la desigualdad que pudiera darse, atiende exclusivamente a que no se igual el origen mismo de la transacción sujeta al derecho.

**OCTAVO.** Dado el crecimiento poblacional que se ha venido generando en el Estado, resulta indiscutible la necesidad de la construcción de más viviendas que permitan garantizar a sus ciudadanos contar con espacio digno y decoroso en el que puedan habitar sus familias, motivo por el cual resulta indiscutible la necesidad de ajustar la ley de ingresos para armonizarla a los requerimientos de cada Municipio, disponiendo una serie de incentivos en algunos cobros tributarios que se realizan en cada Municipio del Estado, como son el ISAI, Licencias de Construcción, Autorización de planos, con lo que se evitará un incremento en los costos de construcción de las casas, y repercutirá a favor de los habitantes del Estado al adquirir sus viviendas.

**NOVENO.** Que, en igual forma, se propuso otorgar un incentivo del orden del 50% a pensionados, jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, en aquellos Municipios donde realiza el cobro de agua potable y alcantarillado el mismo Municipio, circunscribiendo este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en que habitualmente residan los beneficiarios de este incentivo.

**DÉCIMO.** Que, asimismo, esta Comisión de Hacienda, realizó reuniones de trabajo con cada uno de los Municipios para analizar conjuntamente los conceptos y montos que aseguraran a las haciendas municipales una recaudación de ingresos justa y oportuna por los diferentes conceptos conforme a las disposiciones aplicables.

**DÉCIMO PRIMERO.** Que, a juicio de esta Comisión de Hacienda, las tasas y tarifas que los Ayuntamientos de; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020, proponen en sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos, que son las adecuadas para que gobernantes y gobernados participen en la tarea de administrar su Municipio y provocar un desarrollo acorde a las demandas que la población hace a sus autoridades, garantizando una tributación fiscal equilibrada, así como congruencia con el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Código Financiero para los Municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Que, conforme a lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda, considera procedente proponer que la Ley de Ingresos que deberá regir en los Municipios de Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020, se autorice con el incremento a los criterios generales que se determinó aplicar en las Leyes de Ingresos de los Municipios, así como con la observancia de los lineamientos generales que se establecieron con relación a estos ordenamientos municipales. Con la observación de que el Dip. José Benito Ramírez Rosas, se abstuvo en su votación en los municipios de:

Acuña, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Morelos, Múzquiz, Nava, Saltillo, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

**DÉCIMO TERCERO.** El Presupuesto de Ingresos se elaboró con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las clasificaciones presupuestales emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, lo cual permite un lenguaje armonizado que facilite y permita su comparabilidad con la intención de mejorar la practica presupuestal a fin de consagrar la transparencia y la rendición de cuentas como una política pública prioritaria para el buen desempeño de la gestión pública municipal.

En virtud de lo anterior, y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción IV, 92 fracción II, 116 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión de Hacienda, somete a su consideración, discusión y en su caso aprobación, las siguientes:

**LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE: ACUÑA, ALLENDE, CASTAÑOS, CUATRO CIÉNEGAS, GENERAL CEPEDA, GUERRERO, MONCLOVA, MORELOS, MÚZQUIZ, NAVA, PARRAS, PIEDRAS NEGRAS, RAMOS ARIZPE, SALTILLO, TORREÓN, VIESCA, VILLA UNIÓN Y ZARAGOZA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

**ARTÍCULO 1.** Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y determinar los ingresos de los Municipios de: Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

**ARTÍCULO 2.** En los términos del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los ingresos de los Municipios señalados en el artículo primero para el ejercicio fiscal del año dos mil diez y nueve, se integrarán con los provenientes de los conceptos que se señalan a continuación:

**A. De las Contribuciones**

I. Del Impuesto Predial

II. Del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles

III. Del Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles

IV. Del Impuesto Sobre Prestación de Servicios

V. Del Impuesto Sobre Espectáculos y Diversiones Públicas

VI. Del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles Usados

VII. Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos

VIII. Del Impuesto Sobre Plusvalía

IX. De Las Contribuciones Especiales

1. De La Contribución por Gasto
2. Por Obra Pública
3. Por Responsabilidad Objetiva
4. Por Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos de los Municipios
5. Por Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico
6. Por Otros Servicios Municipales

X. De Los Derechos por la Prestación de Servicios Públicos

1. De Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. De Los Servicios de Rastros
3. De Los Servicios de Alumbrado Público
4. De Los Servicios en Mercados
5. De Los Servicios de Aseo Público
6. De Los Servicios de Seguridad Pública
7. De Los Servicios en Panteones
8. De Los Servicios de Tránsito
9. De Los Servicios de Previsión Social
10. De Los Servicios de Protección Civil

XI. De los Derechos por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones

1. Por la Expedición de Licencias para Construcción
2. De los Servicios por Alineación de Predios y Asignación de Números Oficiales
3. Por la Expedición de Licencias para Fraccionamientos
4. Por Licencias para Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas
5. Por la Expedición de Licencias para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios
6. De los Servicios Catastrales
7. De los Servicios por Certificaciones y Legalizaciones
8. Por la Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Servicios de Control Ambiental

XII. De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Municipio

1. De los Servicios de Arrastre y Almacenaje
2. Provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas
3. Provenientes del Uso de las Pensiones Municipales

**B. De los Ingresos no Tributarios**

I. De los Productos

1. Disposiciones Generales
2. Provenientes de la Venta o Arrendamiento de Lotes y Gavetas de los Panteones Municipales
3. Provenientes del Arrendamiento de Locales Ubicados en los Mercados Municipales
4. Otros Productos

II. De Los Aprovechamientos

1. Disposiciones Generales
2. De los Ingresos por Transferencia
3. De los Ingresos Derivados de Sanciones

III. De las Participaciones y Aportaciones

IV. De los Ingresos Extraordinarios

**C.- De los Estímulos Fiscales e Incentivos.**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** La Ley de Ingresos de los Municipios empezara a regir a partir del día 1° de Enero del año 2020.

**SEGUNDO.-** Para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal, se entenderá por:

I.- Adultos mayores.- Personas de 60 o más años de edad.

II.- Personas con Discapacidad. - Todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades.

III.- Pensionados. - Personas que, por vejez, incapacidad, viudez o enfermedad, reciben una pensión por cualquier institución.

IV.- Jubilados. - Personas separadas del ámbito laboral por antigüedad en el servicio.

**TERCERO.-** Los derechos a pagar por la Expedición de las Certificaciones Municipales a que se refiere la Ley para la regulación de venta y consumo de alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se entenderá referidas como las Licencias para Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas, conforme como se dispone en esta Ley de Ingresos, según corresponda el caso de que se trate; igualmente, en consecuencia, las certificaciones municipales tendrán los mismos elementos tributarios que para tales licencias dispone el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.-** Los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet la ley de ingresos ciudadana con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**QUINTO. -** Los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2020, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de ingresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Ingresos base mensual.

**SÉXTO. -** Las menciones que se hagan de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la presente ley, se entenderán hechas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo estipulado en la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

**SÉPTIMO. -** Publíquese íntegra y por separado las Leyes de Ingresos de los Municipios de: Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. María Eugenia Cázares Martínez.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. María Esperanza Chapa García | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. José Benito Ramirez Rosas | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 11 de septiembre de 2018, se acordó turnar a esta Comisión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en materia del uso de tecnologías como herramienta para el aprendizaje del estudiante.

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a esta Comisión la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El uso de celulares es parte importante en la vida de la mayoría de las personas. Sin embargo, el aprovechamiento de los dispositivos entre menores de edad, en el mayor número de casos, carece de una adecuada utilidad respecto del contenido que internet puede arrojar ante cualquier búsqueda. Por ello, los padres o tutores deben mantener una permanente observancia de sus hijos cuando hacen uso de las tecnologías, principalmente de redes sociales, juegos o sitios de interés.*

*El alcance del uso de celulares en los menores de edad conlleva una persistente responsabilidad en los padres y adultos que los conducen en su vida diaria, puesto que aquellos aún se encuentran en un proceso de formación y adquisición de valores y principios que, frente a una nula supervisión de su manejo estas herramientas aumentan el riesgo de conflictos o distracciones en la que es una de sus actividades principales: la obtención de conocimientos proporcionados por una institución educativa.*

*Sabemos que la formación académica de los alumnos es una obligación compartida en una sociedad, de modo que, con el objetivo de hacer cumplir la ley, las autoridades debemos garantizar una educación de calidad, motivo por el cual los docentes deben estar centrados en la total e integra transmisión del conocimiento basados en el contenido de estudios que el Estado proporciona. Hemos dejado atrás la época en la que la escuela basaba su formación a través de la cultura escrita en papel. Frente a este desafío tecnológico del acaparamiento del internet y las redes sociales surge la pregunta: ¿hay que permitir que los alumnos utilicen el celular en el aula? la creación de estrategias que ayuden a las escuelas y familias a encauzar el adecuado uso del dispositivo digital abonará directamente en la disminución de los efectos nocivos del empleo excesivo de esta herramienta. Las investigaciones realizadas sobre el cuestionamiento de permitir o no el uso de celulares por los estudiantes al interior de las aulas han dado cuenta que el resguardo de éstos durante la impartición de clases ha generado automáticamente resultados positivos. Por lo tanto, se propone la prohibición del uso de celulares en instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico de primaria y secundaria en el Estado.*

*La medida generaría efectos positivos, ya que el estudiante requiere desenvolverse a través de la actividad física e interacción directa con sus compañeros. Un niño debe saber llevar un diálogo cara a cara y expresar sus emociones, es decir, desarrollar habilidades de comunicación. Por ello, la necesidad de evitar la distracción de los estudiantes. Cabe destacar que la comunicación escrita a través de los celulares es tendiente a la deformación del lenguaje y debilita el desarrollo de la escritura convencional, realidad que se vuelve alarmante en la preparación académica de las niñas, niños y adolescentes.*

*Adicionalmente, en cierto grado, esta medida logra evitar la posible exposición de los menores en las redes sociales, circunstancia que los sitúa en condiciones de vulnerabilidad al acoso y hostigamiento a través de diversos sitios en internet.*

*Paralelo al argumento de los padres de familia y tutores en cuanto a mantener contacto ilimitado con sus hijos a través del celular en caso de alguna emergencia o incidente, es obligación de las y los maestros, así como de las autoridades de la institución dar aviso inmediato a éstos y coadyuvar para brindar una debida asistencia.*

*Sin ignorar que un dispositivo móvil representa también una fuente de aprendizaje y es un medio para complementar lo que un estudiante aprende en clase, hagamos consciencia y fomentemos en las niñas, niños y adolescentes el correcto empleo de las nuevas tecnologías de manera que les permita ingresar a datos y referencias sobre temas que incidan directamente en su formación.*

*De acuerdo con las experiencias de otros gobiernos en la implementación de esta política pública, la propuesta de iniciativa versa en la prohibición del uso de celulares por el alumno al interior del aula, de tal suerte que, en el horario definido para el receso de clases, el estudiante podrá hacer uso de su dispositivo móvil.*

*Para el caso que nos ocupa, esta iniciativa considera que su cumplimiento sea dispuesto por los estudiantes que han de cursar el nivel básico de educación de*

*primaria y secundaria. Así, la iniciativa que se presenta procura potenciar las capacidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes del Estado. ”*

**TERCERO. -** El objeto de la iniciativa planteada, es que en los niveles de educación básica de primaria y secundaria se prohíba el uso de dispositivos móviles de comunicación y de navegación en internet por parte de los educandos, durante el tiempo destinado para la impartición de horas efectivas de clases.

Al respecto quienes aquí dictaminamos consideramos realizar algunas consideraciones respecto de la iniciativa en cuestión.

Principalmente al prohibir el uso de los dispositivos móviles y de navegación en internet se estaría dificultando el uso pedagógico de la tecnología para la creación artística, búsqueda de información e investigación, producción de herramientas de video, radio y prensa escolar, por citar algunos ejemplos.

En la actualidad la mayoría de las instituciones educativas cuentan con normas relacionadas con el uso de computadoras, tabletas y celulares, toda vez que al existir ya la necesidad del uso de las nuevas tecnologías se diseñaron los reglamentos internos tomando en cuenta la libertad responsable, la negociación cotidiana de normas y la solución de conflictos con un toque pedagógico y restaurativo, con la única finalidad de generar aprendizaje y prevención para la sociedad digital.

Es importante señalar que las tabletas y las computadoras con las que se equipan los centros de cómputo de algunas instituciones educativas, son muy similares a los celulares inteligentes y muchas veces estos celulares son los medios idóneos para suplir la falta de internet en algunas escuelas públicas.

Estamos convencidos que no debemos restarles autonomía a las escuelas y a los educadores, ya que la cultura digital es una realidad que obliga a buscar estrategias educativas creativas y estructuradas. No obstante sabemos que la tecnología también conlleva riesgos y responsabilidades es entonces que surge la necesidad de un uso limitado y orientado de dichos dispositivos para los educandos.

El uso de celulares en las escuelas, las tabletas, los dispositivos como herramientas de trabajo de docentes, de alumnos, pantallas para trabajo grupal, tableros digitales, kits de robótica, computadoras portátiles, de escritorio, cámaras digitales, grabadoras, conexiones inalámbricas, son solo algunos de los dispositivos de los cuales surge la duda si deben o no ser utilizados por los alumnos, sin pasar por desapercibido que en algunas escuelas particulares ya aplican los software educativos o aplicaciones como mathletics que permite a los alumnos competir en matemáticas con alumnos de otros países, dispositivos y aplicaciones todas ellos, que bien manejadas por los alumnos y supervisadas de manera adecuada por los docentes pueden ser usadas para una excelente preparación digital.

Por ello resulta imprescindible que no le restemos importancia a la decisión que pueden tomar las familias, los docentes y los alumnos que dialogando y con directrices expertas pueden determinar que tecnologías son necesarias dentro del aprendizaje educativo. La cuestión radica en identificar las ideas de los alumnos y maestros que quieren cambiar la realidad social y crear medios de comunicación comunitaria, lograr cosas útiles con la tecnología de esta época, incluyendo los celulares.

Por lo anterior quienes aquí dictaminamos, considera necesario adecuar la iniciativa planteada con la finalidad de que en todo momento se supervise y se cuide el uso de dispositivos móviles y de navegación en internet, que en las instituciones educativas que sean utilizados no sean usados como distractor durante el tiempo destinado para la impartición de clases, sino más bien como herramientas de apoyo académico, si la normatividad interna de la Secretaría de Educación y de cada plantel educativo lo permite.

Finalmente, cabe señalar que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas realizó algunas modificaciones en cuanto a la técnica legislativa del Proyecto de Decreto para darle viabilidad a la misma.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

**ARTICULO 7°.-** ...

I a la VI...

**VII.-** Encauzar el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología en atención a los requerimientos de la sociedad; fomentando entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a Ias mejores prácticas como herramienta apropiada, así como prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernéticos, advirtiendo de los riesgos por el uso de internet; **en los niveles de educación básica de primaria y secundaria, se deberá cuidar que el uso de dispositivos móviles de comunicación y de navegación en internet no sean usados como distractor durante el tiempo destinado para la impartición de horas efectivas de clases**.

VIII a la XVIII…

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISION DE EDUCACIÓN,**

**CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS (SECRETARIO)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Educación.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 27 de junio de 2019, se acordó turnar a esta Comisión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Educación, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación a estudiantes embarazadas o con hijos.

**SEGUNDO. -** Que, en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a esta Comisión la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Educación, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

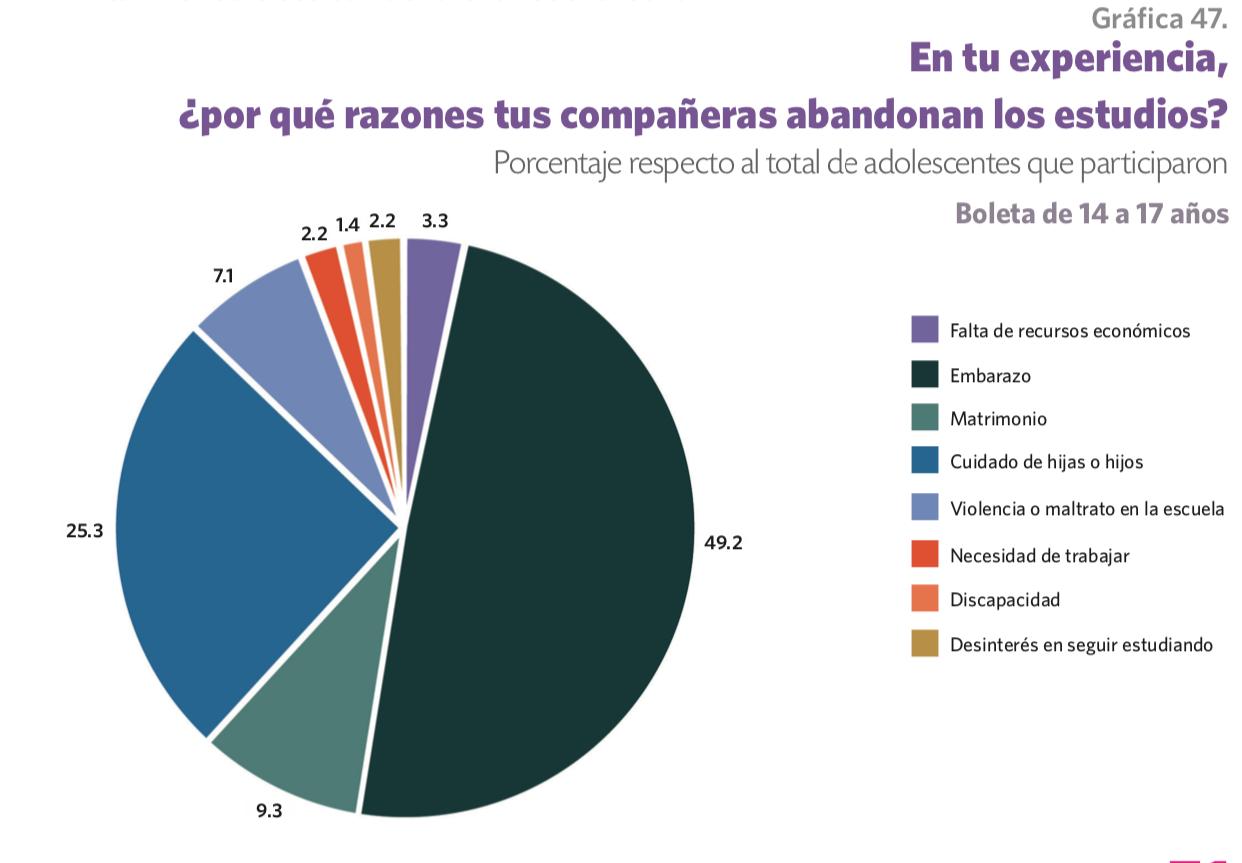
*“El derecho humano a la educación es imprescindible para que las personas adquieran diversas habilidades, destrezas y múltiples conocimientos. Es la pieza ineludible dentro de toda sociedad para alcanzar el desarrollo integral desde una perspectiva personal, familiar, social y cultural.*

*La concepción del derecho a la educación cuenta con un importante precedente en los ordenamientos de índole internacional que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, formando parte del bloque de constitucionalidad que prevé el artículo 133 de nuestra Carta Magna al decir que “La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”[[3]](#footnote-3)*

*Los instrumentos normativos internacionales estipulan obligaciones a los Estados parte con miras a promover y garantizar en todo momento el principio pro persona, en búsqueda de la aplicación de la norma más favorable a todos los seres humanos. En base a ello, se han generado estándares y pautas internacionales en relación al disfrute y acceso del derecho a la educación, cuya armonización a nivel interno en nuestros ordenamientos se hace necesaria.*

*La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer suscrita por México en fecha 17 de julio de 1980, establece en su artículo 10 que “los Estados parte adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación…”[[4]](#footnote-4)*

*Sin embargo, el pleno acceso del derecho a la educación en algunos supuestos resulta coartado por múltiples causas. Reflejo de ello se observa en la más reciente Consulta Infantil y Juvenil 2018 realizada por el Instituto Nacional Electoral, instituciones públicas y organismos civiles, la cual reveló que las y los adolescentes de entre 14 y 17 años de edad perciben que la deserción escolar para las mujeres se debía en casi el 50% de los casos por razón de embarazo. Al mismo tiempo, este grupo consideró como la segunda causa el cuidado de hijas e hijos, y como tercera el matrimonio, señalando en cuarto lugar, aunque apenas rebasa el 7%, que la violencia en el contexto escolar es también señalada como una razón de abandono a los planteles educativos.[[5]](#footnote-5)*

*[[6]](#footnote-6)*

*Es alarmante observar que la primera causa de deserción escolar en el país la constituyen las estudiantes en periodo de gestación.*

*El embarazo no debería ser supuesto de limitación o restricción de su derecho a la educación, dado que esta condición física no debe ser categorizada como una conducta amoral o como motivo de mala conducta dentro de las instituciones educativas, por lo que no debe existir ningún tipo de discriminación de facto por parte de las escuelas o las instituciones educativas.*

*Ante este escenario, hasta el pasado año nuestro país ocupaba el primer lugar a nivel mundial entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de embarazos en adolescentes. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año.[[7]](#footnote-7)*

*Por su parte, el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que Coahuila cuenta con la tasa más alta de entre todos los estados del país en embarazos y nacimientos de madres entre 10 y 17 años, 25.5 por cada mil mujeres en ese rango de edad. Por ende se encuentra entre las primeras diez entidades federativas con mayor tasa de nacimientos por cada mil mujeres.*

*De los datos arrojados podemos concluir que todas ellas se encontraban en una edad óptima para cursar algún grado académico específico. Pues en lo que respecta al perfil de las madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registro que en el país el 73% cuenta con la escolaridad básica -primaria, secundaria y preparatoria-, solo el 15% con una carrera profesional y el 12% restante no especificó su grado académico.*

*Ante esto, se visualiza que cuando en el entorno escolar se presenta un evento de embarazo existe una mínima posibilidad de que se asuman de manera conjunta la maternidad y la educación, dado que en la mayoría de los casos las mujeres prefieren posponer o abandonar su formación académica por no contar con el apoyo suficiente por parte de las instituciones educativas a las que pertenecen.*

*En las últimas décadas, tanto México como otros países latinoamericanos señalaron que el vínculo del rezago o abandono escolar relacionado con la maternidad ha cobrado mayor relevancia por ser un problema complejo y multicausal que constituye un tema emergente en la deserción escolar, que requiere de un análisis sistematizado para reflexionar y sensibilizar en general a todo el personal educativo de las situaciones reales de nuestras adolescentes.*

*La deserción escolar solamente provoca desigualdad en la distribución del capital económico, cultural y social de todas las comunidades. Por el contrario, la permanencia de las alumnas que se encuentran en periodo de gestación en los planteles educativos favorece en todo momento su desarrollo personal y da pauta a la generación de nuevos roles sociales de manera conjunta con el ejercicio de la maternidad.*

*El embarazo y la maternidad no deben constituir un impedimento para el ingreso, egreso y permanencia en planteles educativos públicos y privados. Es por ello que los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucional velamos por la salvaguarda de los derechos humanos, especialmente para el pleno goce del derecho a la educación otorgando a las estudiantes en estado de gravidez las facilidades necesarias para continuar superándose, todo esto con la visión de garantizar mayores condiciones de vida digna para todos los coahuilenses. ”*

**TERCERO. -** El objeto de la iniciativa planteada, es garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación a estudiantes embarazadas o con hijos, y una vez que se realizó un análisis a la misma, por parte de esta Comisión de Educación estamos de acuerdo con el objeto de la Iniciativa planteada, sin embargo, sería conducente realizar algunas consideraciones y adecuaciones a la misma.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018 la tasa en México fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de inicio de las relaciones sexuales, en el 23 por ciento de estos números, fue entre los 12 y 17 años. Según las cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ocurren en nuestro país 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

Definitivamente son cifras alarmantes y a esto le sumamos el problema del desempleo y el abandono escolar al enfrentarse a la problemática del nuevo embarazo. Existen estrategias que se han implementado como el Programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, aún tenemos un gran número de deserción escolar.

El rezago educativo y la deserción escolar representan distintos factores que tienen un gran impacto en la población y se ha demostrado que la mejor manera de romper ciclos intergeneracionales de la pobreza es a partir de amplificar la trayectoria educativa de las personas, la educación es el medio para garantizar la productividad y la equidad social, además desarrolla la capacidad de innovación y de competitividad, es un espacio para la integración social.

Los embarazos en adolescentes vienen acompañados de serios problemas ya que las jóvenes madres pierden el interés por el estudio y en muchas ocasiones se ven en la necesidad de laborar para conseguir el sustento diario ya que muchas veces estos jóvenes no cuentan con el apoyo de familiares.

En la mayoría de los casos, el embarazo se convierte en un gran obstáculo para culminar sus estudios, incrementando así la deserción escolar, además de la problemática a la que se ven forzados al aceptar trabajos informales, pues con su corta edad no son aptos para laborar en empresas formales y sus oportunidades personales y sociales se limitan seriamente.

En nuestro Estado la Ley de Protección a la Maternidad establece en su artículo 15, fracción IV que las mujeres embarazadas tienen derecho al acceso y continuidad en la educación y que para ello las instituciones educativas públicas y privadas deben contar con mecanismos para flexibilizar los planes de estudio, horarios, así como justificar la inasistencia por motivo de atención médica.

A su vez la misma legislación prevé como prohibición, limitar el derecho a la educación a las mujeres embarazadas, artículo 19, fracción VI.

Coincidimos en armonizar las legislaciones del Estado al estipular dentro de la Ley de Educación la garantía del derecho que tienen las mujeres embarazadas para continuar sus estudios, con mayor razón las menores embarazadas y madres adolescentes, sin embargo, y en lo que respecta a garantizar los cuidados médicos de las estudiantes embarazadas, debemos tomar en cuenta que no todas las instituciones educativas cuentan con atención médica inmediata dentro de los planteles escolares, por lo que no sería viable responsabilizar a la institución de los cuidados médicos con los que se debe contar durante el embarazo.

Además, se debe enfatizar que lo que se pretende principalmente es garantizar la continuidad de los estudios a aquellas jóvenes embarazadas, siempre y cuando cumplan con sus planes de estudios y a las que decidan iniciar sus estudios, cumplan con los requisitos de ingreso y que su embarazo no sea motivo para que se les restrinja su acceso a la educación.

Por lo anterior se considera que la garantía a la educación de las mujeres embarazadas pueda ser contemplado en un precepto de la Ley Estatal de Educación y sea la Autoridad Educativa quien implemente los mecanismos necesarios para crear programas de apoyo y sensibilización, que tengan como finalidad garantizar la continuidad de los estudios de las menores embarazadas y madres adolescentes.

Finalmente, quienes aquí dictaminamos hicimos algunas modificaciones de técnica legislativa al Proyecto de Decreto planteado por el promovente, toda vez que el Artículo 26 de la Ley de Educación actualmente cuenta con XXI fracciones y no con XXII como lo plantea el promovente de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción XXII al artículo 26 de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

**ARTICULO 26.-** …

I. a la XXI.- …

XXII.- Vigilar que el embarazo y la maternidad no constituyan impedimento para que las estudiantes ingresen o continúen realizando sus estudios en los centros educativos públicos o privados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia; por lo que el personal docente, directivo y los responsables de las instituciones educativas oficiales y privadas de cualquier nivel o modalidad en el Estado, no podrán bajo ninguna circunstancia, adoptar acciones que impidan o perturben el inicio o continuación de sus estudios a las alumnas en estado de gravidez o lactancia, ni imponer medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las estudiantes, o que provoquen su baja en el sistema educativo por causa de embarazo.

Las instituciones educativas públicas o privadas, en cuanto a la estudiante embarazada, deberán establecer mecanismos para justificar su inasistencia por motivos de atención médica.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISION DE EDUCACIÓN,**

**CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS (SECRETARIO)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 29 de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó el día 10 de diciembre del presente año, a esta Comisión la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En México, la educación es un derecho humano consagrado e inherente a todo individuo a través del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que, éste tiene derecho a recibir educación y que la misma, desde el nivel básico y hasta la media superior será obligatoria. El Estado, integrado por la Federación, Estados y Municipios, es el facultado y obligado para impartirla.*

*Así mismo, la reforma publicada el día 15 de mayo del presente año, en el cual se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior y se establece que, la educación se basará en la dignidad de las personas e igualdad sustantiva, en este sentido las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento al Sistema Educativo Mexicano en el mencionado artículo 3º constitucional, se regulan a través de la Ley General de Educación, la cual en el artículo 6, determina lo siguiente:*

*"****Artículo 6.*** *Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.*

*Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.*

*La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente Ley.*

*La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia.*

*Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.”*

*En este sentido el artículo 16 fracciones III y IV de la citada legislación señala:*

*“****Artículo 16.*** *La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.*

*Además, responderá a los siguientes criterios:*

*IIII. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;*

*IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia;”*

*Adicionalmente, se atiende lo establecido por los instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración y Plan de Acción: Un mundo apropiado para los niños; los cuales han sido ratificados por el Estado Mexicano y plantea un conjunto de disposiciones generales relativas a las personas menores de 18 años, entre ellas algunas relacionadas con las obligaciones especiales que los Estados contraen respecto de la infancia.*

*Como se observa, en los instrumentos internacionales, en nuestra Carta Magna y, por ende, la Ley General de Educación, se pugna por una educación libre de violencia, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así como, contribuir al aprecio para la dignidad de la persona, sustentar los ideales de universalidad, inclusión, democracia, humanista, equitativa, inclusiva e intercultural. No obstante, en México la violencia social tiene diversas manifestaciones y escenarios, uno de ellos es en las escuelas, en la cual en los últimos años se ha presentado un fenómeno denominado bullying (término inglés), que es el equivalente del acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar, y que se refiere a la situación en la que un alumno o alumna es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o alumna o varios de ellos.*

*En un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en agosto de 2011,[[8]](#footnote-8) se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7%. Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran haber sido en su escuela, víctimas de robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, maltratados físicamente 16.72%, o atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.*

*La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue adoptada por los países miembros de la ONU, busca a atender los 17 objetivos, que en el marco del tema que nos ocupa, el objetivo 4 denominado “Educación de Calidad” establece el garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, en su meta 4.7, precisa que además se debe garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.[[9]](#footnote-9)*

*De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990.[[10]](#footnote-10)*

*Con la CDN, los niños y niñas dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la CDN, los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas, a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.[[11]](#footnote-11)*

*La CDN establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos, definiendo los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes. Del mismo modo, en México se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, cuyo objeto es garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.*

*En ese sentido, el Estado también ha mostrado determinación en su actitud ante los grandes retos que el interés superior de la niñez implica, muestra de ello, el 18 de marzo de 2014**se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*A pesar de todos estos esfuerzos, tanto a nivel federal como local existe el compromiso de continuar actualizando las acciones en materia de legislación sobre la figura del acoso escolar, por lo que en el Estado hemos realizado un trabajo exhaustivo para revisar que nuestro marco jurídico coadyuve en la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales, interpretaciones, criterios y acciones que tienden a atender los estándares de derechos humanos en México.*

*El Gobierno del Estado, preocupado por lograr la materialización de la igualdad de todas las mujeres y niñas, promovió la realización de foros en las distintas regiones del Estado, en los que se trataron aquellos temas que representan una problemática para las mujeres en la vida cotidiana, así como las propuestas para eliminar esta brecha de desigualdad y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres.*

*En estos foros se tuvo la participación destacada de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la experiencia en temas de derechos de las mujeres, muchas de ellas por haber vivido circunstancias personales que las han llevado a luchar por ellas mismas y por otras mujeres que se encuentran en su misma situación, estas mujeres representan también, la voz de las mujeres que de alguna manera no han logrado superar los obstáculos que les impiden alcanzar el disfrute pleno de sus derechos humanos, así como también representantes de la administración pública del estado, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Congreso del Estado de Coahuila y del Poder Judicial del Estado de Coahuila.*

*Es así que durante los foros que se realizaron en diferentes municipios del Estado, como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, se presentaron las propuestas y se lograron los acuerdos que ayudaron a la elaboración de esta iniciativa.*

*La presente iniciativa tiene por objeto reforzar diversos artículos de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y fortalecer su espíritu, por lo que en el Capítulo I del Título Primero se fortalecen los objetivos de la presente Ley, que, entre otros, establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género y de una cultura de paz y protección de los derechos humanos, orienten el diseño e instrumentación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar; diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a un ambiente libre de violencia, por lo que se reforman las fracciones I, II y VIII del artículo 3, eliminando la redacción actual de dichas fracciones y adicionando un párrafo final al artículo en mención, lo anterior con el objeto de incorporar elementos relacionados a los actuales enfoques de educación para la paz y los derechos humanos.*

*Se adicionan los principios y ejes rectores de la ley, que son:*

* *EI interés superior del menor.*
* *EI respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos.*
* *La prevención del acoso escolar.*
* *La no discriminación.*
* *La interdependencia.*
* *La igualdad sustantiva.*
* *La resolución no violenta de conflictos.*
* *La cohesión comunitaria.*
* *La promoción de la cultura de paz.*
* *La tolerancia.*
* *La coordinación interinstitucional.*
* *EI pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad.*

*Los principios y ejes antes mencionados, serán la base para el desafío, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que realicen las autoridades competentes, así como todas las acciones que lleven a cabo los sectores privado y social para prevenir y atender el acoso escolar.*

*Se adiciona la fracción XVI del artículo 4, como un concepto la cultura de la paz, que es una herramienta para los maestros que les permitirá estar cerca de los padres de familia y crear dentro de las escuelas espacios de diálogo y confianza en los que maestros y alumnos hagan propuestas, resuelvan conflictos, lleguen a acuerdos y aprendan a reconocer lo bueno en quienes los rodean. La cultura de la paz lleva implícitos otros valores como justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad, entre otros. La educación en valores es un factor importante para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo.*

*Se modifican diversas disposiciones, con el objeto de incorporar un leguaje incluyente y con perspectiva de género, incluyendo en la redacción alumnos y alumnas o padres y madres.*

*En el Capítulo II, denominado “De las Autoridades, Distribución de Competencias y Coordinación”, se adiciona el artículo 6 bis para especificar autoridades que también estarían obligadas a la aplicación y seguimiento de la Ley, entre las que se señalan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.*

*Se adiciona una fracción al artículo 7, para incorporar que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría se coordinará con las autoridades municipales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.*

*Además, se propone una modificación al Capítulo I del Título Segundo denominado “Características, Modalidades y Prohibición del Acoso Escolar”, para especificar las distintas formas en que se ejerce la violencia escolar y los sujetos que pueden participar en ella.*

*Se adiciona diversas disposiciones, en las que se enuncian las características con las que se identifica el concepto de acoso escolar, toda vez que en la normativa actual esta definición no está señalada.*

*Del mismo modo, se establece que corresponde a las instituciones educativas del Estado la obligación fundamental de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar y se señalan las acciones para ello. Además de contemplar que las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes, y en general, con toda la sociedad.*

*Por otra parte, se ha realizado una revisión exhaustiva de la ley, revisando su articulado, con la finalidad de incorporar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, del mismo modo se plantean definiciones teóricas de vanguardia como:*

1. *Fomentar el respeto a la dignidad de los demás.*
2. *Cultivar valores de inclusión, tolerancia y equidad.*
3. *Promover la empatía y el diálogo.*
4. *Educar en el respeto de derechos y el cumplimiento de responsabilidades.*
5. *Desarrollar instrumentos que coadyuven a construir escuelas libres de violencia.*
6. *Impulsar consensos plurales para prevenir y atender la violencia.*
7. *Difundir y promover la cultura de la legalidad.*
8. *Inculcar el valor de la solidaridad.*

*Se modifica la redacción de los artículos 12 y 13, para enfatizar sobre la importancia del diseñar e implementar modelos de prevención de la violencia en el ámbito escolar, orientándolos a reducir y detener el daño que ésta genera, por lo cual esta propuesta adiciona en estas disposiciones, la tarea que tendría la autoridad escolar de generar una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo para prevenir, disminuir y erradicar conductas violentas, atendiendo entre otros, a los principios de interés superior de la niñez, debida diligencia y pro persona para garantizar el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal, con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad escolar, que permitan la convivencia armónica, pacífica e inclusiva.*

*Se contempla dentro del artículo 27, el objeto de introducir la visión de una cultura de la legalidad en las acciones de sensibilización, capacitación y formación de maestras y maestros mediante la inserción de elementos de formación de valores donde se aprecia los beneficios de una convivencia pacífica.*

*Se adiciona el Capítulo VII “De los Derechos, Prohibiciones y Obligaciones de la Comunidad Escolar”, adicionando diversas disposiciones que contemplan los derechos, prohibiciones y obligación de la comunidad escolar, con respecto a las acciones a implementar ante cualquier situación constitutiva de acoso escolar.*

*Con la aprobación de la presente reforma, el Estado contará con un marco normativo de avanzada en la materia, garantizando el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a un ambiente libre de violencia.”*

**TERCERO.-** Del análisis de la iniciativa planteada por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, se desprende que tiene como objetivo reforzar diversos artículos de la Ley de Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, fortaleciendo los objetivos de la misma desde la perspectiva de género y de una cultura de paz y protección de los derechos humanos, orienten el diseño e instrumentación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar; diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a un ambiente libre de violencia.

Debe existir un compromiso social desde todas las esferas, generando políticas e intervenciones que refuercen las relaciones fundamentales en la paz entre alumnos, padres de familia y profesores, y lograr afrontar aquellos conflictos que se generen en los centros educativos de una forma no violenta.

Es factible tratar el fenómeno de la violencia en los centros escolares, posibilitando mecanismos de prevención y fomentando actitudes y hábitos de convivencia pacífica y de valores, no podemos permitir que aun existan carencias en la formación y capacitación de los docentes sobre la manera de prevenir y tratar los crecientes tipos de violencia escolar, y por ello es que cobra mayor importancia la aplicación de planes y programas de educación para la paz, la convivencia y la no violencia en los centros educativos y que sean promovidos en todos los niveles educativos, tanto por instituciones públicas como privadas.

Es por ello que esta Comisión esta consciente en que las legislaciones de nuestro Estado deben coincidir con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y con todas las acciones que pretendan erradicar todo tipo de violencia, ya que la paz y el bienestar de la sociedad constantemente se ven amenazadas con violaciones a los derechos humanos y a la libertad individual. Sabemos que actuando con verdad y con justicia a través del dialogo se construyen sociedades libres y humanas, debemos reconocer y garantizar la convivencia pacífica para el desarrollo de la humanidad protegiendo siempre los Derechos Humanos de todas las personas.

Finalmente reconocemos que nuestro Estado ha tenido avances en la difusión y aplicación de diversos programas encaminados a erradicar cualquier tipo de violencia, y nuestra legislación ha ido actualizándose y renovándose conforme a las necesidades de la sociedad encaminadas a la Cultura de Paz, al respeto de los Derechos Humanos, a la Igualdad de Género, a la No Violencia, a la Diversidad Cultural, entre otros. Además, y como se expone en la Iniciativa que nos ocupa los foros realizados en distintos municipios del Estado, apoyaron mediante distintas propuestas a concretar la elaboración de la Iniciativa a la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se **reforma** el artículo 1, las fracciones I, II y VIII del artículo 3, las fracciones I, XII y XIII del artículo 4, las fracciones VIII y IX del artículo 7, la fracción XV del artículo 8, la denominación del Capítulo I del Título Segundo, el artículo 12, las fracciones II, IV y VI del artículo 13, el primer párrafo, segundo párrafo y las fracciones II, IV y V del artículo 21, el articulo 22 y la fracción III del artículo 36; y se **adiciona** un último párrafo al artículo 3, el artículo 3 Bis, las fracciones XIV, XV y XVI al artículo 4, el artículo 6 Bis, la fracción X al artículo 7, el artículo 9 Bis, el artículo 9 Ter, el artículo 9 Quáter, el artículo 22 Bis, un segundo párrafo al artículo 27, el Capítulo VII al Título Segundo, el artículo 30 Bis, el artículo 30 Ter, el artículo 30 Quáter, el artículo 30 Quinquies y la fracción IV al artículo 36 , de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y privadas del Estado de todos los niveles educativos, sobre la base de que un ambiente libre de violencia, con pleno respeto a los derechos humanos e igualdad sustantivita, a fin de generar una cultura de la paz.

**Artículo 3.** …

1. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género, igualdad sustantiva y de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia física, moral y emocional escolar, dentro de Sistema Educativo Estatal;
2. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos tendentes a garantizar el derecho de los estudiantes que integran la comunidad educativa a una vida libre de acoso escolar promoviendo su convivencia pacífica;

III. a VII. …

1. Fomentar y, en su caso, implementar programas estatales de coordinación interinstitucional que propicien, en el ambiente escolar, el desarrollo de una cultura de protección y de ejercicio de los derechos humanos y, de manera particular, los principios de equidad y no discriminación, interés superior de la niñez, la dignidad humana y la paz.

La actuación de las autoridades ante los casos de acoso escolar se regirá por lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 3 Bis.** Los principios y ejes rectores de esta Ley, son:

I. EI interés superior del menor;

II. EI respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos;

III. La prevención del acoso escolar;

IV. La no discriminación;

V. La interdependencia;

VI. La igualdad sustantiva;

VII. La resolución no violenta de conflictos;

VIII. La cohesión comunitaria;

1. La promoción de la cultura de paz;
2. La tolerancia;
3. La coordinación interinstitucional; y
4. EI pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad.

Dichos principios serán la base para la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que realicen las autoridades competentes, así como todas las acciones que lleven a cabo los sectores privado y social para prevenir y atender el acoso escolar.

**Artículo 4.** …

1. Acoso escolar: Conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por lo que uno o varios alumnos o alumnas pretenden intimidar, someter, amedrentar y/o atemorizar, emocional o físicamente, a uno o varios alumnos o alumnas, dentro de una escuela pública o privada de Educación Básica, con el propósito de:
2. a e) …

II a XI. …

XII. Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar: La compilación detallada de la incidencia del acoso escolar en el Estado, que realizará la Secretaría;

XIII. Secretaría: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XIV. Alumno o alumna: Persona que se encuentra matriculada en alguna escuela pública y privada, de cualquier nivel de educación en el Estado;

1. Padres y madres de familia: En donde se contemple la persona mayor de edad que puede tener la guardia y custodia de la niña, niño o adolescente; y
2. Cultura de la paz: El conjunto de valores, actitudes, comportamientos, modos de vida y acciones que reflejan el respeto de la vida de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, el rechazo del acoso escolar en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, y tolerancia.

**Artículo 6 Bis.** Para los fines de esta Ley y en plena observancia a la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, las autoridades establecidas en el artículo anterior podrán solicitar la colaboración en la atención de casos de acoso escolar, de manera enunciativa mas no limitativa, a las instancias siguientes:

1. La Secretaría de Salud;
2. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social;
3. La Secretaría de Seguridad Pública;
4. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos;
5. La Fiscalía General del Estado; y
6. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

**Artículo 7.** …

I. a VII. …

VIII. Integrar el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar y garantizar su publicidad en los términos de ley;

IX. Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso escolar en el Estado; y

1. Coordinarse con las autoridades municipales para la implementación de políticas públicas para prevenir y atender el acoso escolar.

**Artículo 8.** …

I. a XIV. …

XV. Establecer responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento del personal escolar a las disposiciones contenidas en esta Ley y dar aviso a la Secretaria sobre el personal educativo que incumpla algunas de las disposiciones previstas en esta Ley o que no atiende las indicaciones realizadas por su superior jerárquico para a atención y solución del acoso escolar;

XVI. a XVII. …

**CAPÍTULO I**

**De las Características, Modalidades y Prohibición del Acoso Escolar**

**Artículo 9 Bis.** EI acoso escolar se caracterizará por:

1. Comportamiento intencional y dañino, provocando presión hacia el receptor, quien se encuentra en situación de indefensión, aun cuando este no sea reportado;
2. Predominio de un desequilibrio de poder entre los que participan;
3. Persistencia de dichas acciones de forma reiterada, cuya duración va desde unas semanas a meses;
4. Realización de dichas acciones por una o varias personas contra otro u otros; y
5. Provocación de algún tipo de daño en el receptor.

**Artículo 9 Ter.** El acoso escolar será considerado como tal, cuando:

1. Se lleve a cabo dentro de las instalaciones de una escuela, en las inmediaciones o en otro lugar donde los sujetos tengan una relación por la pertenencia al mismo centro escolar o a centros escolares distintos;
2. Se lleve a cabo durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar a cargo de un centro escolar;
3. Suceda en el interior de un vehículo de transporte escolar;

Las conductas de acoso y violencia escolar realizadas entre educandos en los casos no previstos en las fracciones anteriores serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto por el derecho común.

**Articulo 9 Quáter**. Las escuelas tienen la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su vida, su integridad física y moral, y su dignidad, por lo que deberán:

1. Ofrecer a todos los alumnos y alumnas una formación permanente en el respeto por los valores de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación de los demás, la tolerancia hacia las diferencias entre personas y la solidaridad hacia las personas;
2. Inculcar a todos los estudiantes un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, vulnerabilidad o capacidades sobresalientes;
3. Establecer entre los alumnos y alumnas prácticas cotidianas de trato fraternal, así como métodos de solución amigable y pacífica de las diferencias o conflictos entre ellos;
4. Proteger eficazmente a los estudiantes contra toda forma de acoso, hostigamiento, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros, los profesores, los trabajadores o directivos; y
5. Establecer en sus reglamentos y disposiciones internas, los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir el acoso, hostigamiento, agresión física o psicológica, humillación, discriminación y burla hacia los demás, especialmente hacia los niños, niñas y adolescentes.
6. Remitir un informe ante la Secretaría, al término de cada ciclo escolar, el cual contenga un sumario mensual de las denuncias recibidas y las acciones tomadas.

**Artículo 12.** El Plan de Prevención del Acoso Escolar es el instrumento rector en la materia, de cumplimiento obligatorio, el cual se realizará con perspectiva de género y protección de los derechos humanos, y promoverá una cultura de paz y no violencia escolar, debiéndose revisar, evaluar y actualizar cada dos años.

El Plan de Prevención del Acoso Escolar impulsará modelos de prevención del mismo y las estrategias que incorporen el trabajo cooperativo, el intercambio cultural, la cohesión en la comunidad escolar, entre otros.

**Artículo 13.** …

* 1. …
  2. Integrar a todo el alumnado mejorando las relaciones de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, en un ambiente libre de violencia que fortalezca sus competencias y habilidades intelectuales en beneficio propio y de la colectividad, además de fomentar el sentido de justicia, democracia, honestidad, veracidad, solidaridad, responsabilidad, no violencia y ante todo el aprecio a la vida;
  3. …
  4. Fomentar la participación de estudiantes, personal escolar y autoridades, así como de padres, madres y tutores, en la prevención del acoso escolar;
  5. …
  6. Fomentar el registro estadístico de los incidentes de acoso escolar y garantizar el acceso a la información.

**Artículo 21.** Cualquier miembro del personal escolar deberá informar inmediatamente a la persona titular de la Dirección de la escuela de cualquier caso de acoso escolar o represalia, del cual haya sido testigo o tenga noticia.

Tras la recepción de dicho informe, la persona titular de la Dirección de la escuela investigará sin demora y lo registrará en la bitácora escolar. Si la Dirección de la escuela, o su designado, determina que el acoso escolar o represalias han ocurrido, deberá:

1. …
2. Notificar a las autoridades competentes si la persona titular de la Dirección de la escuela o su designado estiman que la gravedad del acoso pueda requerir su intervención;
3. …
4. Informar a los padres, madres o tutores del autor y cómplices; y
5. Comunicar a los padres, madres o tutores de la víctima, las medidas adoptadas para prevenir o brindar atención especializada de cualquier acto de acoso escolar o represalia.

**Artículo 22.** Los padres y madres de familia podrán reportar supletoriamente ante la Secretaría, actos de acoso escolar cuando, a su juicio, los directivos de la escuela hayan sido omisos en atender la denuncia.

**Artículo 22 Bis.** Se establecerán los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en casos de violencia, acoso o maltrato escolar en cualquier modalidad, así como los mecanismos remotos de recepción a través de una línea pública de atención telefónica y por medios electrónicos.

**Artículo 27.** …

La sensibilización, capacitación y formación de maestras y maestros se basará en educación para los valores y contará con las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para fortalecer sus habilidades en todas las áreas del conocimiento dentro del aula, así como para tener la capacidad para prevenir y atender la violencia escolar con la finalidad de generar en el ambiente escolar un entorno de armonía y paz.

**CAPÍTULO VII**

**De los Derechos, Prohibiciones y Obligaciones de la Comunidad Escolar**

**Artículo 30 Bis.** Los reglamentos interiores de las instituciones que refiere la Ley Estatal de Educación, deberán especificar derechos, prohibiciones y obligaciones tendientes a prevenir y eliminar el acoso escolar, a través de medidas de carácter disuasivo, correctivo y educativo, y en su caso, establecer las sanciones a aplicar en cada caso, tomando como parámetro lo estipulado en la presente Ley.

**Artículo 30 Ter**. La persona receptora de las modalidades de acoso escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:

1. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;
2. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del gobierno estatal cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;
3. Recibir información veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;
4. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;
5. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;
6. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;
7. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso;
8. En caso de riesgo grave, a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad; y
9. A la reparación integral del daño.

**Artículo 30 Quáter.** La persona que por sus actos se define como generadora de acoso escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:

1. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
2. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos;
3. Recibir información veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;
4. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;
5. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso; y
6. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

**Artículo 30 Quinquies**. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

**Artículo 36.** …

I. a II. …

III. Inhabilitación para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año o más, o en forma definitiva. La Secretaría podrá apercibir de manera privada a la institución educativa que incumpla con las obligaciones de esta Ley, amonestarla públicamente cuando se reincida en el incumplimiento o proceder a su clausura cuando las dos sanciones anteriores hayan sido insuficientes para subsanar el incumplimiento; y

IV. Las demás sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en materia administrativa, civil o penal.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** En un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán de hacer las adecuaciones a los reglamentos interiores de las instituciones, en los que se especifiquen derechos, prohibiciones y obligaciones tendientes a prevenir y eliminar el acoso escolar.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISION DE EDUCACIÓN,**

**CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |  |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** | **RESERVAS** |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (COORDINADORA)** |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS (SECRETARIO)** |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el Cuarto Párrafo del Artículo 6 de la Ley Estatal de Educación.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 5 de junio de 2019, se acordó turnar a esta Comisión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el Cuarto Párrafo del artículo 6 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de que las instituciones educativas cuenten con más de un proveedor y/o distribuidor de uniformes y dar opciones a las madres y padres de familia, evitando así las prácticas monopólicas.

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a esta Comisión la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el cuarto párrafo del artículo 6 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En el mes de septiembre de 2018 presente una Proposición con Punto de Acuerdo en el cual solicité a la Secretaría de Educación del Estado que se exhortara a las instituciones educativas públicas y privadas a acatar el cumplimiento del párrafo cuarto del artículo 6° de la Ley de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de que contaran con más de un proveedor y/o distribuidor de uniformes escolares y evitar prácticas monopólicas.*

*Sin embargo, a la fecha seguimos observando cómo algunas instituciones educativas de nuestro Estado continúan teniendo un solo proveedor exclusivo de elaboración y venta de uniformes escolares. El artículo 6 de la Ley Estatal de Educación señala en relación con los uniformes escolares, que las escuelas tanto públicas como privadas otorgaran a los padres y tutores la libertad de adquirir los uniformes escolares con el proveedor de su elección, sin embargo, para que pueda garantizarse esta libertad de elección, es necesario que exista al menos dos proveedores de uniformes, es por ello que resulta necesario hacer una modificación a este artículo, para imperar ese derecho de libre elección, pues aún persiste el problema de proveedores únicos en los uniformes escolares.*

*Como se señala, la práctica de imponer a un solo proveedor para adquirir los uniformes escolares continúa, y los padres de familia siguen obligados a comprar los uniformes escolares al precio y calidad que un único proveedor ofrece; la diferencia sería un sistema en el que coexistan varios distribuidores en los que los precios y la calidad varían y esto permite escoger la opción que se acople más a la economía familiar.*

*Por ejemplo, aún existen diversos colegios privados que de algún modo restringen las opciones a los padres o tutores a la hora de elegir un establecimiento para la adquisición de uniformes, ya que por lo general es el centro escolar el que no permite la distribución de uniformes con su logo distintivo registrado, sea confeccionado, elaborado y distribuido por otra empresa que no sea la que ya se ha contratado exclusivamente.*

*Las prácticas monopólicas se encuentran prohibidas expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 28 de la misma establece lo siguiente:*

*En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.*

*En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.*

*Además, la Ley Federal de Competencia Económica también prevé en su artículo 52, la prohibición de los monopolios, de las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de dicha Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre la concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.*

*Es por ello que con esta iniciativa se pretende evitar que en las escuelas tanto públicas como privadas, lleven a cabo prácticas monopólicas al imponer un solo proveedor autorizado para la comercialización de uniformes escolares, lo cual como se señala en el cuerpo de la presente exposición de motivos, estas prácticas siguen generando que los padres y madres de familia tengan forzosamente que comprar los uniformes de sus hijos a los precios que ellos imponen y a la calidad con la que realizan sus prendas, o incluso, a disputar por la disponibilidad de los mismos.*

*Por lo tanto, se propone reformar el párrafo cuarto al artículo 6° de la Ley Estatal de Educación, a fin de garantizar el derecho de libre elección de los padres y tutores de adquirir los uniformes escolares, pudiendo escoger al menos entre dos proveedores, así como establecer la prohibición a las instituciones educativas de autorizar un solo proveedor de uniformes.”*

**TERCERO. -** La iniciativa planteada pretende reforzar en la Ley Estatal de Educación, el derecho de libre elección de los padres y tutores para adquirir los uniformes escolares de sus hijos, contenida en el artículo 6 de dicho ordenamiento y establecer la prohibición de proveedores únicos.

Al respecto, es importante señalar que si bien el artículo 6 de la Ley Estatal de Educación dispone que los padres o tutores tienen la libertad de adquirir los uniformes escolares con el proveedor de su elección, lo cierto es que para hacer efectiva esa prerrogativa es indispensable que existan varios proveedores, de ahí la necesidad fortalecer esa libertad de elegir al proveedor de uniformes que sea más conveniente en cuanto a precio o calidad, pues en la práctica persiste la problemática de lidiar con proveedores únicos, a pesar de la norma.

Es por ello que coincidimos con la iniciativa en cuestión, ya que como se señala en la exposición de motivos, existen antecedentes de que algunas instituciones educativas limitan la adquisición de uniformes con un solo proveedor, pues solo autorizan a un proveedor único para el uso de los logotipos distintivos del plantel escolar para comercializar sus uniformes, esto de alguna manera obliga a comprar a ese proveedor exclusivo, coartando no solamente la libertad de elección sino que es evidente las prácticas monopólicas a pesar de estar prohibidas en nuestra Carta Magna.

Consideramos procedente la iniciativa para reformar el párrafo cuarto del artículo 6° de la Ley Estatal de Educación, planteada por el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, pues a pesar del texto actual de dicho artículo, persiste la práctica indebida en los planteles educativos, principalmente privados, de limitar la adquisición de uniformes con un solo proveedor, por lo que consideramos que debe quedar aún más claro el sentido de la norma que es precisamente que las madres, padres de familia o tutores tengan más opciones para adquirir los uniformes de sus hijos, pero sobre todo de prohibir este tipo de prácticas.

No obstante, se realizaron modificaciones al proyecto de decreto de la iniciativa planteada a efecto de que no fuera limitativa a dos proveedores, sino que se entienda que debe haber varios proveedores para que exista variedad en la elección de adquirir uniformes escolares.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se reforma el cuarto párrafo del Artículo 6 de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

ARTICULO 6°.- …

….

….

Las escuelas públicas y privadas en el Estado de Coahuila que establezcan el uso de uniformes para los alumnos, deberán conceder un plazo de hasta cuarenta días hábiles para que cumplan con este requisito, otorgando a los padres y tutores la libertad de adquirirlos con el proveedor de su elección, **para lo cual, las escuelas deberán autorizar diversos proveedores para la adquisición de los uniformes, quedando prohibido la práctica de un único proveedor exclusivo.**

...

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISION DE EDUCACIÓN,**

**CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS (SECRETARIO)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a enajenar a título gratuito a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), un lote de terreno con una superficie de 154-84-30.56 hectáreas, ubicado en el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con objeto de llevar a cabo la construcción de una Base de Operaciones Militares en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

**RESULTANDO**

* **ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 18 del mes de diciembre del año 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración, es concertar la realización de acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017– 2023”,** y sus programas, con las diferentes instancias de gobierno sea federal, estatal o municipal, lo que favorecerá el desarrollo social, cultural y económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ratifica su intención de coadyuvar con la Federación, en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la preservación de la seguridad y la paz nacional, la salvaguardia de los derechos e integridad física de las personas, preservar las libertades individuales, el orden y la paz pública, en virtud de lo cual, solicita autorización para enajenar a título gratuito, un predio rústico que forma parte de la fracción N°2(dos) y fracción N°3 (tres), del predio rústico denominado “EL CEDRO”, al poniente de la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, construyan su Base de Operaciones Militares en dicho municipio.

Que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, es propietario y poseedor, con pleno dominio, de dos lotes de terreno que se describen a continuación: 1) Lote 8 (ocho), que forma parte de la Fracción 2 (dos) con una superficie de 12-80-23.80 hectáreas y 2) el Lote 9 (nueve) que forma parte de la fracción 3 (tres), con una superficie de 142-04-06.72 hectáreas, ambos lotes se ubican dentro del predio rústico denominado “EL CEDRO”, dando un total de 154-84-30.56 hectáreas, al poniente de la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, amparando su titularidad con copia certificada de la Escritura Pública N° 322, de fecha 8 de octubre de 2019, otorgada ante la Fe del Lic. Héctor Iván González Martínez, Notario Público Número 18, con ejercicio en el Distrito Notarial de Torreón, e inscrita en la Oficina de la ciudad de Acuña del Registro Público del Estado, el 19 de noviembre del 2019, bajo la Partida 126, Libro 2, Sec. IX.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con la Federación en el cumplimiento de sus objetivos, como la preservación de la seguridad y paz nacional, salvaguardando los derechos e integridad física de los habitantes de esa región, llevando a cabo los fines que a la Secretaría de la Defensa Nacional, como es la construcción de una Base de Operaciones Militares en dicho municipio, además se otorgará certeza jurídica del predio en mención, seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, UN PREDIO DE SU PROPIEDAD CON UNA SUPERFICIE DE 154-84-30.56 HECTÁREAS, UBICADOS EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito, un lote 8 con una superficie de 12-80-23.84 hectáreas, que forma parte de la Fracción N°2 (dos) y el lote 9 con una superficie de 142-04-06.72 hectáreas, que forman parte de la Fracción N°3 (tres) del predio rústico denominado “EL CEDRO”, al poniente de la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de acuerdo al cuadro de construcción y colindancias siguientes:

**CUADRO DE CONSTRUCCIÓN LOTE 8 FRACCION 2**

**SUPERFICIE TOTAL 12-80-23.84 HECTÁREAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LADO** | | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST** | **PV** | **X** | **Y** |
|  |  |  |  | A | 298,433.99 | 3,245,767.29 |
| A | B | 452.93 | S 06°42’45”E | B | 298,486.93 | 3,245,317.46 |
| B | C | 310.07 | N 83°30’23”W | C | 298,178.85 | 3,245,352.53 |
| C | D | 387.02 | N 07°39’40”W | D | 298,127.25 | 3,245,736.09 |
| D | 38 | 12.96 | N 83°25’04”E | 38 | 298,140.13 | 3,245,737.58 |
| 38 | A | 295.36 | N 84°13’37”E | A | 298,433.99 | 3,245,767.29 |

Colindancias: Al Norte colinda con Carretera Acuña-Santa Eulalia; al Sur colinda con el Lote número (9) Nueve; al Oriente colinda con el Lote (8-C) ocho guión “C”; al Poniente colinda con el Lote (8-B) ocho guión “B”.

**CUADRO DE CONSTRUCCIÓN LOTE 9 FRACCION 3**

**SUPERFICIE TOTAL 142-04-06.72 HECTÁREAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LADO** | | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST** | **PV** | **X** | **Y** |
|  |  |  |  | 87 | 298,514.66 | 3,243,417.41 |
| 87 | 88 | 603.60 | N 83°56’26”E | 88 | 298,114.88 | 3,243,481.12 |
| 88 | 90 | 1,723.05 | N 05°41’33”W | 90 | 298,943.97 | 3,245,195.67 |
| 90 | 89 | 100.00 | S 84°18’36”W | 89 | 298,844.47 | 3,245,185.76 |
| 89 | 76 | 92.50 | N 05°41’32”W | 78 | 298,835.29 | 3,245,277.80 |
| 78 | 41 | 839.13 | N 83°30’22”W | 41 | 298,001.54 | 3,245,372.71 |
| 41 | 87 | 2,021.50 | S 14°42’15”E | 87 | 298,514.66 | 3,245,417.41 |

Colindancias: al Norte colinda con fracción del Lote 3 (tres); al Sur colinda con el Lote 10 (diez); al Oriente colinda con Fracción 2 (dos); al Poniente colinda con herederos del Señor Lorenzo González Treviño.

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito, la superficie total de 154-84-30.56 hectáreas conformadas por el lote 8 fracción 2 y lote 9 fracción 3, de terreno mencionado en el ARTÍCULO PRIMERO del presente Decreto, a favor del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con la finalidad de que, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, construyan su Base de Operaciones Militares en el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que por sí mismo, o por medio del representante legal que designe, otorgue a favor del Gobierno Federal, la Escritura Pública correspondiente a la enajenación a título gratuito, que con el presente se autoriza.

**ARTÍCULO CUARTO. -** Los gastos que se generen como consecuencia del proceso de Escrituración y registro de la operación autorizada en este Decreto, serán cubiertos totalmente por el Gobierno Federal.

**ARTÍCULO QUINTO. -** El presente Decreto deberá inscribirse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO SEXTO. -** En el supuesto de que no se formalice la enajenación a título gratuito que en el presente Decreto se autoriza, dentro de un término de cuarenta y ocho meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto o el donatario no cumpla con la construcción de su Base de Operaciones Militares en el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose, en su caso, de nueva autorización legislativa, para proceder a la enajenación gratuita del inmueble a que se hace referencia en el Artículo Primero de este Documento, y se revertirá el bien inmueble al patrimonio del Gobierno del Estado.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea una nueva fracción vigésimo segunda (XXII) recorriendo las subsecuentes del artículo 4, y reforma por adición la fracción segunda (II) y crea la fracción sexta (VI), ambos del artículo 56, todos los anteriores de la Ley Estatal de Salud; y crea una nueva fracción Décimo Primera (XI), recorriendo las subsecuentes del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 05 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea una nueva fracción vigésimo segunda (XXII) recorriendo las subsecuentes del artículo 4, y reforma por adición la fracción segunda (II) y crea la fracción sexta (VI), ambos del artículo 56, todos los anteriores de la Ley Estatal de Salud; y crea una nueva fracción Décimo Primera (XI), recorriendo las subsecuentes del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea una nueva fracción Vigésimo Segunda (XXII) recorriendo las subsecuentes del artículo 4, y reforma por adición la fracción segunda (II) y crea la fracción sexta (VI), ambos del artículo 56, todos los anteriores de la Ley Estatal de Salud; y crea una nueva fracción Décimo Primera (XI), recorriendo las subsecuentes del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea una nueva fracción Vigésima Sexta (XXVI), recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; y reforma la fracción Primera (I) y Quinta (V) por adición y crea la fracción Séptima (VII) del artículo 79, todos los anteriores de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 05 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea una nueva fracción Vigésima Sexta (XXVI), recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; y reforma la fracción Primera (I) y Quinta (V) por adición y crea la fracción Séptima (VII) del artículo 79, todos los anteriores de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea una nueva fracción Vigésima Sexta (XXVI), recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; y reforma la fracción Primera (I) y Quinta (V) por adición y crea la fracción Séptima (VII) del artículo 79, todos los anteriores de la Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la fracción Cuadragésima Primera del artículo 3; crea el artículo 21 Bis; y crea la fracción Cuadragésima del artículo 188, todos los anteriores de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; reforma el artículo 1, el tercer párrafo del artículo 3, la fracción primera del artículo 5 y crea el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 02 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 05 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la fracción Cuadragésima Primera del artículo 3; crea el artículo 21 Bis; y crea la fracción Cuadragésima del artículo 188, todos los anteriores de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; reforma el artículo 1, el tercer párrafo del artículo 3, la fracción primera del artículo 5 y crea el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la fracción Cuadragésima Primera del artículo 3; crea el artículo 21 Bis; y crea la fracción Cuadragésima del artículo 188, todos los anteriores de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; reforma el artículo 1, el tercer párrafo del artículo 3, la fracción primera del artículo 5 y crea el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma la fracción Quinta (V) del artículo 103, y crea un nuevo párrafo cuarto del artículo 160, recorriendo los subsecuentes de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; crea el tercer párrafo del numeral quinto fracción tercera del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 12 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma la fracción Quinta (V) del artículo 103, y crea un nuevo párrafo cuarto del artículo 160, recorriendo los subsecuentes de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; crea el tercer párrafo del numeral quinto fracción tercera del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta (V) del artículo 103, y crea un nuevo párrafo cuarto del artículo 160, recorriendo los subsecuentes de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; crea el tercer párrafo del numeral quinto fracción tercera del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 12 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro Educativo para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 12 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro Educativo para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro Educativo para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 12 de diciembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Coahuila, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, D.O.F. 28 de noviembre de 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy> [↑](#footnote-ref-7)
8. Ver en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41068/4/S1700122\_es.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. Liderar la agenda mundial Educación 2030, https://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ver en: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos [↑](#footnote-ref-10)
11. Ver en: https://www.unicef.org/spanish/crc/index\_30177.html [↑](#footnote-ref-11)